**VIGENCIA ESPACIAL DE LA NORMA PENAL EN LOS
DELITOS COMETIDOS POR LAS PERSONAS JURÍDICAS:
¿EN QUÉ MEDIDA ES APLICABLE EL ARTÍCULO 23 DE
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL?**

Dra. Ana Belén Valverde-Cano

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	2
II. CUESTIONES PRELIMINARES	5
<i>II.1. El alcance espacial de la norma penal y la naturaleza de las normas de atribución</i>	6
<i>II.2. ¿Cuál es el locus delicti commissi de la persona jurídica?</i>	9
III. APLICABILIDAD DEL ACTUAL ART. 23 LOPJ A LOS DELITOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	13
<i>III.1 Principio de territorialidad (apartado 1)</i>	13
<i>a) La responsabilidad penal de la persona jurídica extranjera por los delitos que cometen sus representantes o subordinados en España</i>	15
<i>b) La responsabilidad penal de la persona jurídica extranjera por hechos cometidos íntegramente en el extranjero</i>	20
<i>III.2 Principio de personalidad activa (apartado 2)</i>	25
<i>III.3 Principio de protección (apartado 3)</i>	30
<i>III.4 Principio de jurisdicción universal (apartado 4)</i>	32
IV. LA NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA	36
V. CONCLUSIONES	40
VI. BIBLIOGRAFÍA	42

VIGENCIA ESPACIAL DE LA NORMA PENAL EN LOS DELITOS COMETIDOS POR LAS PERSONAS JURÍDICAS: ¿EN QUÉ MEDIDA ES APLICABLE EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL?

*Dra. Ana Belén Valverde-Cano **

I. INTRODUCCIÓN

El establecimiento de criterios de atribución de jurisdicción generosos puede evitar eficazmente lagunas de impunidad. Habrá, eso sí, dilemas de coordinación porque varios Estados tendrán que ponerse de acuerdo para decidir quién es competente y cómo afrontar los posibles problemas de *bis in idem* en caso de enjuiciamiento parcial en distintos foros¹. Pero este no es el único problema. Supongamos que un país muy poderoso y desarrollado establece un principio de personalidad activa muy amplio, de modo que es competente para enjuiciar a las empresas que tengan su domicilio social en ese Estado, aunque los hechos tengan lugar íntegramente fuera de su territorio. Si esta empresa provoca una catástrofe medioambiental en un país en vías de desarrollo y los tribunales del país donde está domiciliada

* Investigadora Ramón y Cajal en el área de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.

⁰ Esta publicación se ha elaborado en el marco de los proyectos RYC2022-037101-I (IP: Ana Belén Valverde-Cano)/PID2022-141610OB (IIPP: Bernardo Feijoo Sánchez, Enrique Peñaranda Ramos)/PID2022-141824OB-I00 (IIPP: Adán Nieto Martín, Marta Muñoz de Morales Romero). Agradezco especialmente a Juan Antonio Lascurain Sánchez por haberme introducido en este tema y por las conversaciones que fueron dando forma a muchas de las ideas que aparecen aquí, como atestigua nuestra colaboración en *Verdes y Justas: Responsabilidad penal y diligencia debida en las organizaciones internacionales* (2025). Otro agradecimiento necesario es a Leopoldo Puente Rodríguez, por sus pertinentes comentarios. Naturalmente, cualquier desacuerdo es solo mío.

¹ Advierte esto BLANCO CORDERO (2023), p. 4, y lo que denomina *forum shopping*. VERVAELE (2018), pp. 159-160, señala que esto conduce a veces al uso unilateral de la jurisdicción por un único actor poderoso que defiende sus intereses y valores de forma expansiva y extralimitada a nivel global: «el resultado es una amalgama en la que se mezclan excesos de actividad, una actividad insuficiente o, directamente, inactividad. [...] [C]abe observar que, en la mayoría de los casos, las autoridades nacionales se limitan a perseguir intereses nacionales. Los procesos penales consecutivos sobre un mismo hecho punible, los conflictos de jurisdicción o el doble castigo o *bis in idem* no se perciben como un problema del que esas autoridades nacionales se deban responsabilizar» (p. 167).

enjuician la actuación de la empresa —cobrando la multa correspondiente—, esta podría oponer el *bis in idem* frente verdadero sufridor de los hechos y donde seguramente sean más acuciantes las exigencias de estabilización normativa y de reparación económica².

Los criterios de atribución de jurisdicción deben tener en cuenta los delicados equilibrios globales. Esta es la razón por la que, aunque no existe un tratado internacional que discipline lo que se conoce como *jurisdiction to adjudicate*³, los Estados tienden a compartir idénticos criterios. El absolutamente dominante es el de territorialidad (su enjundia histórica puede atisbarse en el aforismo latino *extra territorium ius dicenti impune non paretur*)⁴. Pero también son ampliamente compartidos los restantes criterios de personalidad —normalmente activa— y de protección real⁵. Esto sin contar con que la mayoría de los ordenamientos jurídicos introducen cláusulas que permiten extender la jurisdicción a los hechos extraterritoriales que se acuerden en tratados internacionales⁶. A continuación puede observarse un cuadro comparativo con varios países⁷:

² Ciertamente, hay propuestas —quizás demasiado optimistas— que podrían mitigar este efecto, como aquellas relacionadas con las medidas restaurativas o, incluso, el «comiso restaurativo», como sugieren CARDONA BARBER (2023), pp. 214-222; NIETO MARTÍN, DE PABLO SERRANO (2023), pp. 219 y ss. En cualquier caso, es preciso reconocer, como muestra VERVAELE (2014), pp. 1-33, que el *ne bis in idem* plantea múltiples problemas de aplicación en relación con las personas jurídicas.

³ Esta «competencia para adjudicar» se refiere al establecimiento del foro doméstico de enjuiciamiento. Es distinto de la «competencia para prescribir» (*jurisdiction to prescribe*), que alude a la capacidad de emitir normas aplicables. En materia penal, por tratarse de normas tan vinculadas a las convicciones básicas de justicia de la sociedad y a los intereses estatales, se tiende a hacer coincidir el foro con el ordenamiento aplicable. Los tribunales de un Estado solo aplican su Derecho penal, por lo que, de este modo, las cuestiones sobre si hay jurisdicción y sobre el ámbito de aplicación de las normas penales coinciden. Vid., GALLANT (2003), pp. 763 y ss.; RYNGAERT (2015), p. 9; BÖSE (2018), p. 213; y en la misma obra colectiva, GLESS, WOODS (2018), p. 24.

⁴ Una máxima, originada en el *Digesto* de Justiniano (2.1.20), que significa que un tribunal u otra autoridad no puede hacer cumplir sus leyes fuera de su propio territorio. Cfr., el interesante texto de WOLF (1749), xxvii y *passim*, que sostiene que, de acuerdo con la tradición jurídica romana, el Derecho penal no trasciende las fronteras sin una base jurídica específica, citando para sostener su postura a Accursio y otras autoridades glosadoras.

⁵ En el Caso *Lotus* de 1927, la Corte Internacional de Justicia sostuvo que no existe una regla general del Derecho internacional que prohíba ejercer jurisdicción extraterritorial, y que los Estados pueden hacerlo salvo prohibición expresa. En resoluciones posteriores, como en el caso *Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)*, (2002) y en *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996), sin embargo, adopta un enfoque más restrictivo que refleja una evolución hacia el principio de «prohibición con reserva de permiso» en materia penal. Vid., RYNGAERT (2015), p. 112; PAYER (2023), pp. 187 y ss.

⁶ A esto se le conoce como «principio del tratado». España lo recoge en el art. 23.4.p) LOPJ.

⁷ GLESS, BRONISZEWSKA-EMDIN (eds.) (2018), *passim*.

País	Territorialidad	Personalidad activa	Personalidad pasiva	Protección real	Universalidad
Alemania	Sí	Sí	Limitada	Sí	Limitada
Australia	Sí	Sí	Sí	Sí	Limitada
España	Sí	Sí	No	Sí	Limitada
EEUU	Sí	Sí	Amplia	Sí	Limitada
Finlandia	Sí	Sí	Sí	Sí	Limitada
Francia	Sí	Sí	Amplia	Sí	Limitada
Italia	Sí	Sí	Sí	Sí	Limitada
Rusia	Sí	Sí	Limitada	Sí	No
Suiza	Sí	Sí	Sí	Sí	Limitada

Estos criterios, que son los que básicamente recoge nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 1985⁸, fueron diseñados *a medida de las personas físicas*. Estos individuos eran los súbditos que tenían un *vínculo personal* con el soberano, base de jurisdicción conocida como principio de personalidad activa⁹. Las personas físicas, a diferencia

⁸ De manera no muy distinta lo hacía también su predecesora, la Ley provisional sobre organización del Poder Judicial de 1870. Así, de acuerdo con el art. 333, «[l]os extranjeros que cometieren faltas ó delinquieren en España, serán juzgados por los que tengan competencia para ello por razón de las personas ó del territorio», exceptuando de este criterio a «los príncipes de las familias reinantes, los presidentes ó jefes de otros Estados, los embajadores, los ministros plenipotenciarios, los ministros residentes, los encargados de negocios y los extranjeros empleados de planta en las Legaciones, los cuales, cuando delinquieren, serán puestos á disposición de sus Gobiernos respectivos» (art. 334). Cuando los delitos se hubieran comenzado en España y consumado o frustrados en países extranjeros, «corresponderá á los Tribunales y jueces españoles, en el caso de que los actos perpetrados en España constituyan por sí delito, y sólo respecto á éstos» (art. 335). El art. 336 prevé el criterio de protección real, estableciendo la jurisdicción sobre españoles o extranjeros que fuera del territorio cometan determinados delitos, entre los que se incluyen los de Lesa majestad o rebelión. Para este supuesto, el art. 337 fija una regla para evitar el *bis in idem*, de manera que no se abrirá de nuevo la causa si los reos de estos delitos hubiesen sido absueltos o penados en el extranjero, siempre que se hubiese cumplido la condena. Si, por el contrario, hubieren cumplido parte de la pena, se tendrá en cuenta para rebajar proporcionalmente. También se establece una versión peculiar del principio de personalidad en el art. 339, atribuyendo jurisdicción cuando un español cometa un delito en país extranjero contra otro español. Solo cuando se trate de un delito grave podrá enjuiciarse también al que lo cometa sobre víctima extranjera, y siempre respetando el principio de doble incriminación (art. 341).

⁹ Esta ha sido una importante base para ejercer jurisdicción desde la Baja Edad Media, como aparece en los textos del jurista italiano Bartolo de Sassoferrato, RYNGAERT (2015), pp. 53

de las personas jurídicas, no pueden transmutar. No son ubicuas y, para cambiar de localización jurisdiccional, deben ser trasladadas (o extraditadas). Además, las razones de su responsabilización penal parecen ser, como mínimo, algo distintas. Teniendo en cuenta estas diferencias entre los sujetos a quienes se dirigen las normas penales, parece razonable que también las haya en cuanto los criterios de atribución de jurisdicción¹⁰. Como mínimo, estas deberán tenerse en cuenta a la hora de decidir sobre la aplicación de los ya existentes.

El objetivo de este trabajo, cuyo origen puede trazarse en un artículo que realicé junto con el profesor LASCURAÍN SÁNCHEZ¹¹, y a quien agradezco la discusión de muchas ideas que aparecen aquí, es el de examinar en qué medida son aplicables los principios del art. 23 LOPJ a los delitos imputables a la persona jurídica. Para ello se sigue la siguiente estructura: en primer lugar, examino brevemente el alcance de la norma penal en el espacio y la medida en que las distintas concepciones sobre la naturaleza de la responsabilidad penal de la persona jurídica pueden influir en la determinación del *locus delicti commissi* (II). A continuación, analizo la aplicabilidad actual del art. 23 LOPJ al delito de la persona jurídica, especialmente cuando el foro no puede determinarse por la conexión con el hecho de la persona física (III); y, por último, reflexiono sobre la necesidad de crear unas reglas específicas adaptadas a los delitos de la persona jurídica, para así evitar una suerte de *in dubio pro iurisdictione* (IV).

II. CUESTIONES PRELIMINARES

Con carácter previo, es útil dilucidar dos cuestiones: la primera es un presupuesto (¿cuál es la naturaleza de las normas de competencia sobre las que estamos discutiendo?), y la segunda es una advertencia metodológica sobre la influencia de las distintas concepciones de la responsabilidad penal de la persona jurídica en la respuesta a la

y ss., 107. También se encuentran manifestaciones del principio de personalidad activa en el Derecho romano e, incluso, en la Antigüedad: KASSAN (1935), pp. 237-247; PERKINS (1971), pp. 1155 y ss.; WATSON (1992), p. 46. La razón, sugiere KASSAN, es que «en las etapas más tempranas del desarrollo humano, era la religión, la raza o la nacionalidad de las personas —y no el territorio— lo que constituía la base de una comunidad jurídica», en KASSAN (1935), p. 240. Ciertamente, la ley personal del individuo tenía peso en el Imperio Romano. Los extranjeros (*peregrini*) solían poder recurrir a sus propias leyes. Cuando estaban en Roma, no se les aplicaba el *ius civile* —que solo regía para los ciudadanos romanos—, sino el *ius gentium*; o, si el *ius gentium* no ofrecía una solución, el *ius peregrinum* (o *ius originalis*). Sin embargo, estas últimas leyes no se aplicaban «cuando estaban en juego el interés del Estado o la moral pública», como ocurría, paradigmáticamente, cuando se perseguían crímenes. *Vid.*, RYNGAERT (2015), pp. 51-52.

¹⁰ Advertía de una necesaria revisión de la competencia de Tribunales españoles en orden a la extraterritorialidad de la ley penal, ya en 2004, QUINTERO OLIVARES (2004), p. 113.

¹¹ Puede consultarse en LASCURAÍN SÁNCHEZ, VALVERDE-CANO (2025), pp. 319 y ss.

pregunta de investigación (¿en qué medida es aplicable el régimen del art. 23 LOPJ a los delitos de las personas jurídicas?). Estas aclaraciones allanan el camino, o como mínimo, hacen explícitos ciertos razonamientos sobre los que se construyen los análisis posteriores.

II.1. El alcance espacial de la norma penal y la naturaleza de las normas de atribución

De una lectura combinada de los arts. 8 del Código Civil («Las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio español») y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se deducen las reglas de delimitación de las fronteras de aplicación del Derecho penal nacional. El eje básico es el principio de territorialidad (art. 23.1 LOPJ), que significa que el Código Penal rige en los lugares en los que el Estado español es soberano —básicamente, en su territorio y sus buques y aeronaves—; pero también, como hemos visto, puede ejercer el *ius puniendi* sobre individuos a los que le une un determinado vínculo.

En el caso del principio de personalidad activa (art. 23.2 LOPJ) este vínculo es la pertenencia formal a la misma comunidad política, que se tiene con independencia del comportamiento previo de la persona¹². En los restantes supuestos (principio de protección real y de jurisdicción universal de los apartados 3 y 4 del art. 23 LOPJ), el vínculo es contingente y lo desencadena el propio individuo con su previo actuar ilegítimo. En el primer caso, el Estado reacciona frente a un agravio que le afecta exclusivamente a él¹³. En el segundo, en teoría, actúa como representante de la comunidad internacional a quien el individuo ha lesionado en su conjunto (y, en esa medida, *también* al Estado concreto)¹⁴, aunque, por razones prácticas, se limiten

¹² Para SILVA SÁNCHEZ, este vínculo origina en el Estado un deber de gestionar la fuente de peligro que puede suponer el nacional para bienes jurídicos extranjeros. El «Estado aparece ubicado en una posición de garante por injerencia, en cuya virtud debe someterlos a control», en SILVA SÁNCHEZ (2025), pp. 369-370. Esta forma de fundamentar el principio de personalidad activa me parece problemática porque no explica por qué el cumplimiento de esta obligación debe prevalecer sobre la obligación concurrente del Estado extranjero de proteger a sus propios nacionales, ni por qué emerge esta obligación cuando la persona adquiere la nacionalidad *con posterioridad* a la comisión del hecho, como permite el art. 23.2 LOPJ. ¿Cuál ha sido la injerencia del Estado por el actuar peligroso que debía contener cuando en el momento de materialización del peligro no tenía ningún vínculo con la fuente de peligro?

¹³ KRIZEK (1988), p. 339. Esta base de justificación ha sido no obstante criticada por ser conceptualmente falaz (la defensa sólo cabe frente a un riesgo inminente, no frente a un daño consumado) y susceptible de una interpretación demasiado extensiva: RYNGAERT (2015), p. 115. Por esta razón propone la adopción de una convención internacional al respecto (p. 116).

¹⁴ Distintos de la jurisdicción universal, aunque con algunos rasgos en común, están los principios de jurisdicción vicaria y el de *aut dedere aut iudicare*. El primero hace alusión a la persecución de un delito por parte de un Estado que actúa como representante de otro, si el

las posibilidades de enjuiciamiento a la existencia de lazos adicionales. En ambos casos, por tanto, el Estado se autodefende.

Aunque subsiste la tentación de considerar las reglas de atribución de jurisdicción meramente procesales, esto es, condicionantes de la punibilidad de la conducta, más nos vale recordar que estas definen nuevas obligaciones penales¹⁵: si se amplía el catálogo del art. 23.3 LOPJ, múltiples personas que por ahora no tienen ninguna clase de vínculo con el Estado español, se verían sujetas a sus normas. Ocurre lo mismo con los delitos definidos en el art. 23.4 LOPJ sobre los que se admite jurisdicción universal. Su modificación implica el establecimiento de nuevas obligaciones¹⁶, de modo que la aplicación de las garantías del principio de legalidad en estos casos adquiere pleno sentido, en la medida en que implican una *ampliación* imprevisible de la incriminación penal¹⁷. Dicho con otras palabras: estas normas

hecho es también un delito en el Estado territorial y la extradición es imposible por razones no relacionadas con la naturaleza del delito. En virtud del segundo principio, un Estado está obligado a establecer su jurisdicción sobre cualquier autor del delito presente en su territorio si decide no extraditarlo. Varias convenciones incluyen una cláusula de este tipo, como las Convenciones de Ginebra (1949) y la Convención sobre la Tortura de Naciones Unidas (art. 5.2). *Vid.*, RYNGAERT (2015), p. 121.

¹⁵ Destacan este aspecto material BLANCO LOZANO (2001), pp. 35-79; LASCURAÍN SÁNCHEZ (2009), pp. 51 y ss.

¹⁶ Posiblemente, los casos que van a suscitar más discusión serán aquellos en los que se ha infringido una norma de *ius cogens*, como la prohibición de genocidio, u otras pertenecientes al núcleo de conductas prohibidas en el Derecho internacional. En estos supuestos, se podría sostener que las normas de competencia no actúan como cláusulas de *extensión* de la norma penal a ámbitos en los que no regía; sino, simplemente, estarían disciplinando el enjuiciamiento de una infracción *ya existente*. Creo que a esto se refiere SILVA SÁNCHEZ cuando distingue entre las normas de atribución de jurisdicción de naturaleza penal o procesal, en función de si son normas de conducta y de sanción. Este autor concluye que, si se trata de hechos pertenecientes al núcleo de los delitos *mala in se*, las normas de atribución de jurisdicción son de naturaleza eminentemente procesal —normas de sanción— porque las normas de conducta relativa a la protección de la vida, de la integridad física y moral y de la indemnidad sexual rigen en todo el mundo. El Estado únicamente estaría disciplinando la mera atribución de jurisdicción (*jurisdiction to adjudicate*) y no prescribiendo obligaciones nuevas (*jurisdiction to prescribe*). En cambio, si son delitos que se integran en la periferia de los *mala in se*, o en los *mala quia prohibita*, como no tienen vigencia universal, si se extienden extraterritorialmente pueden ser auténticas normas de conducta *ex novo*. Aquí el Estado estaría *prescribiendo* nuevas sanciones y no solo *adjudicando* jurisdicción. *Vid.* SILVA SÁNCHEZ (2025), p. 366 y ss.

¹⁷ *Cfr.*, FRÍGOLS I BRINES (2004), capítulo VI y *passim*, que utiliza este criterio para dirimir los aspectos problemáticos de la vigencia temporal de la ley penal; o PUENTE RODRÍGUEZ (2024), pp. 248 y ss. Este último autor defiende la relevancia de algunos errores sobre la vigencia espacial de la norma a efectos del error de prohibición. Resalta lo extraño que resulta considerar las normas de vigencia espacial solo condiciones de punibilidad —«¿está hoy un ciudadano malasio que sustrae a otro ciudadano malasio su cartera en las calles de Kuala Lumpur infringiendo el art. 234 CP español y, simplemente, rechazamos enjuiciarlo por una cuestión pragmática?»—. Esto, como sugiere el autor, comporta un planteamiento que no puede compartirse: que los países tienen legitimidad para determinar qué es delito en cualquier parte

suponen la creación de obligaciones penales *ex novo*.

Creo que puede encontrarse respaldo en la jurisprudencia a esta forma de operar, aunque no sea un apoyo rotundo¹⁸. En la STC 75/1984, de 27 de junio (ponente: Francisco Pera Verdaguer), se discutía si se había interpretado de manera analógica *in malam partem* el principio de personalidad pasiva, abarcando no solo al nacional, sino a quien tenía expectativas de serlo (el *nasciturus*) en un delito de aborto llevado a cabo por una mujer española en Londres. La Ley sobre organización del Poder Judicial, aplicable en aquel entonces, establecía en su art. 339 la regla de que «[e]l español que cometiere un delito en país extranjero contra otro español será juzgado en España». En esta resolución, el TC defiende que la extensión de esta norma, aunque sea formalmente de competencia, implica la declaración de punibilidad de una conducta no descrita —básicamente, el establecimiento de una nueva norma penal—. Por este motivo, determina que deben aplicarse las garantías que derivan del art. 25.1 CE, incluyendo la prohibición de una aplicación analógica incompatible con el derecho a la legalidad penal (FJ 6).

Otro ejemplo: en la STS 269/2015, de 6 de mayo (ponente: Cándido Conde-Pumpido Tourón), en un procedimiento para el enjuiciamiento de los supuestos crímenes cometidos como consecuencia de la dominación de la República Popular de China en el Tíbet entre 1950 y 1979, se confirma la ausencia de jurisdicción de los Tribunales españoles debido a la aplicación de la Disposición transitoria de la Ley

del mundo y con respecto a cualquier persona. Las reglas de Derecho internacional establecen amplios límites a la *jurisdiction to prescribe*, relacionados con la soberanía estatal, que no se refieren únicamente al establecimiento de jurisdicción, sino al nacimiento mismo de la obligación. No me resisto a compartir las reflexiones de PUENTE RODRÍGUEZ, que dan cuenta de los riesgos de confundir ambos planos: «¿Mientras escribo estas líneas (o el lector las lee) pesan sobre mí (o sobre él) todos los Códigos penales del mundo? ¿Puedo haber infringido (o haber infringido usted) hoy mismo preceptos de la legislación penal de Rusia, China, Corea, Azerbaiyán o Zimbabue? Si mañana ellos cambiaran sus normas de competencia y fuera apresado por haberlo hecho, ¿sería legítimamente castigado, habida cuenta de que las normas de vigencia espacial son solo normas que condicionan la punibilidad de mi conducta, siempre que supiera, por ejemplo, que expresar una determinada crítica hacia la política coreana sería *allí* delictiva?» (p. 249).

¹⁸ En sentido contrario de los razonamientos expuestos en este trabajo y en el contexto del llamado «caso Pinochet», la Audiencia Nacional entendió que el art. 23.4 LOPJ, al ser una norma procesal y no de punición, «ni es sancionadora desfavorable ni es restrictiva de derechos individuales, por lo que su aplicación a efectos de enjuiciamiento penal de hechos anteriores a su vigencia no contraviene el artículo 9, apartado tres, de la Constitución Española» (FJ 3). Concluye que la pena, para ser impuesta, debe ser anterior a la perpetración del crimen —en este caso, el delito de genocidio—, pero no ocurre lo mismo con la norma de atribución del art. 23.4 LOPJ porque la jurisdicción es presupuesto del proceso, no del delito. *Vid.*, AAN de 5 de noviembre de 1998, Sala de lo Penal, Sección III (ponente: Carlos Cezón González). Crítico con esta interpretación, FRÍGOLS I BRINES (2004).

Orgánica 1/2014, de 13 de marzo. Entre otras muchas cuestiones, el Tribunal Supremo recuerda que es obligatoria la aplicación retroactiva si se trata de una ley que favorece al reo porque, aunque tenga carácter procesal, produce «efectos penales sobre las personas querelladas en este procedimiento» (FFJJ 31 y 33)—¹⁹.

II.2. ¿Cuál es el *locus delicti commissi* de la persona jurídica?

El *locus delicti commissi* es el lugar en el que se han desarrollado, en todo o en parte, los hechos de referencia. Estos elementos, que conforman el objeto procesal, son a su vez los que habrán de ser objeto de investigación y de prueba²⁰. Normalmente, la persona jurídica sigue el fuero de la persona física porque su imputación se funda mayoritariamente en los hechos de referencia cometidos por la física²¹. No obstante, es preciso tener en cuenta dos cosas. Primero, que el delito de la persona física y el de la jurídica siguen cauces, como mínimo, parcialmente independientes (art. 31 ter CP). Segundo, que el objeto procesal del delito corporativo es algo más complejo y distinto que el de la persona física, puesto que no se limita a las acciones u omisiones del individuo que desencadenan la posibilidad de enjuiciar a la persona jurídica. Conlleva necesariamente otros elementos extraídos del art. 31 bis CP, sobre los que versarán las alegaciones y pretensiones de las partes.

Estos dos elementos hacen que sea insuficiente el mero escrutinio

¹⁹ La STS 267/2015, de 8 de mayo (ponente: Cándido Conde-Pumpido Tourón), realiza consideraciones idénticas: «El Código Penal vigente reconoce el efecto retroactivo de las normas penales más favorables al reo en el artículo 2.2 °. Y cuando, como sucede en el caso actual, la norma no es de Derecho penal material, sino que define un presupuesto previo como es la propia jurisdicción del Tribunal, produciendo el mismo efecto, porque determina la imposibilidad de enjuiciamiento y condena, la retroactividad de la norma viene impuesta necesariamente por razones constitucionales básicas» (FJ 13). Asume esta interpretación la SAP de Barcelona 751/2022, de 12 de diciembre (*caso Neymar 2*), que concluye que el art. 23.4 n) LOPJ, referido a la aplicación extraterritorial de los delitos de corrupción en los negocios, al entrar en vigor con posterioridad a los hechos probados, no puede aplicarse ya que supondría una aplicación retroactiva desfavorable. Cfr., FEJJO SÁNCHEZ (2023a), pp. 16 y ss.

²⁰ GASCÓN INCHAUSTI (2012), pp. 33 y ss. PÉREZ MANZANO las califica de «unidades de hecho normativas», integradas por una pluralidad de acciones naturales. Su disociación, reconoce, es posible, e incluso podría dar lugar a varios hechos —objetos procesales— que pueden ser juzgados aisladamente, pero en algunos casos podría conducir a resultados injustos o que no encajan con la perspectiva global adoptada por el legislador. *Vid.*, PÉREZ MANZANO (2018), p. 404.

²¹ GASCÓN INCHAUSTI (2012), p. 50. El artículo 14 bis LECrim también establece una regla especial de competencia en atención al hecho de referencia: «[c]uando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior el conocimiento y fallo de una causa por delito dependa de la gravedad de la pena señalada a éste por la ley *se atenderá en todo caso a la pena legalmente prevista para la persona física*, aun cuando el procedimiento se dirija exclusivamente contra una persona jurídica».

de la conducta individual para determinar el destino jurisdiccional de la persona jurídica. Los criterios que permiten agrupar causas conexas (art. 17 LECrim) *presuponen* la existencia de jurisdicción, no la atribuyen²². Por ejemplo, aunque podamos ser competentes para enjuiciar a un nacional español en virtud del principio de personalidad activa del art. 23.2 LOPJ, no podemos arrastrar a la empresa en cuyo contexto ha actuado la persona física, si no se constata un título de atribución de jurisdicción válido para enjuiciar el delito de la persona jurídica²³. Por esta razón es relevante preguntarse cuándo somos competentes por delitos cometidos por personas jurídicas, ya que, aunque la regla general es que lo somos cuando tenemos jurisdicción para enjuiciar el delito de la persona física, puede haber algunas excepciones.

Ahora bien: ¿cuán diferentes son los objetos procesales de los delitos de la persona física y jurídica? ¿y sus *loci delicti commissi*? Por desgracia para el principio de seguridad jurídica (y, por ende, para todos), esta pregunta tiene una dimensión sustantiva que implica cierto posicionamiento sobre la naturaleza de la responsabilidad penal de la persona jurídica. La razón es sencilla: dado que el objeto procesal está constituido por los elementos relevantes para el derecho de defensa —es decir, aquellos que inciden en la declaración o exención de responsabilidad o punibilidad y que, por tanto, deben ser objeto de prueba—, su delimitación dependerá en parte de cómo se conciba el injusto de la persona jurídica y de hasta qué punto este coincide con el de la persona física²⁴.

Así, cabrían dos posibilidades:

a) Si se considera que los hechos internos de la persona jurídica con relevancia para la infracción son, sobre todo, aquellos que producen o manifiestan el defecto de control o de organización, el único vínculo del delito con el Estado español podrían ser los hechos imputables en exclusiva a la persona jurídica. De este modo, aunque no se tenga competencia para perseguir a las personas físicas autoras materiales

²² Crítica que este error se reproduzca en el *caso Neymar 2* por parte del tribunal FEIJOO SÁNCHEZ (2023a), pp. 16 y ss.: «El art. 17 LECrim es una regla específica de competencia, no de jurisdicción, que tiene como finalidad evitar una ruptura o división de la continenencia de la causa que pueda dar lugar a resoluciones contradictorias. Es decir, no puede ser utilizada con el fin de ampliar el alcance de las reglas del art. 23 LOPJ más allá de sus propios términos».

²³ Así lo advierte PEDRAZ PEÑALVA (2013), pp. 3-4. Cfr., también, GASCÓN INCHAUSTI (2012), pp. 51-52.

²⁴ Lo reconoce GASCÓN INCHAUSTI (2012), p. 58, cuando sostiene que el criterio básico de competencia territorial es el lugar de comisión del delito, pero que «su aplicación en el caso de delitos imputados a personas jurídicas, sin embargo, puede ser fuente de dudas en función de cuáles sean los hechos a los que se atribuya mayor relevancia a estos efectos».

del delito de referencia en el extranjero, se podría perseguir a la corporación²⁵. A esta solución se llega tanto desde el entendimiento de que la conducta de la persona jurídica es una forma de participación omisiva respecto a la conducta individual de referencia²⁶; como desde otras perspectivas que sostengan que es el propio actuar de la persona jurídica —generador o elevador del riesgo no permitido— el que acaba realizándose en el resultado lesivo concreto²⁷.

b) Si, por el contrario, se defiende que el delito de la persona física es a su vez el delito de la persona jurídica, y que el defecto de organización no tiene relevancia penal *per se* (no es delictivo que una empresa sea «desorganizada»), entonces el lugar de comisión del delito es única y exclusivamente el lugar en el que se han cometido los hechos de referencia. El defecto organizativo no sería, entonces, el delito de la persona jurídica, sino el título por el que se puede imputar a esta el delito cometido por la persona física. Esta forma de entender el hecho delictivo puede alcanzarse desde posiciones doctrinales muy distintas, tanto desde enfoques próximos al modelo vicarial como desde concepciones que parten de la auto-responsabilidad de la persona

²⁵ En este sentido, señala GASCÓN INCHAUSTI que «[r]esulta viable entender que este es un lugar de comisión del delito *stricto sensu*, pues es un lugar donde se han llevado a cabo acciones y omisiones relevantes para la imputación penal de la persona jurídica», en (2012), p. 52. Para este autor, la posibilidad de ser competentes en exclusiva del delito atribuible a la persona jurídica se halla en la configuración del objeto del proceso penal en estos casos y en los hechos que se consideran relevantes para medir la jurisdicción de los tribunales españoles (p. 53). Así, aunque la regla ordinaria es que el lugar de comisión del delito es el lugar de comisión de los hechos de referencia, «si se tiene en cuenta que los hechos o conductas que *con mayor rigor determinan la imputación de la responsabilidad a la persona jurídica son los hechos “internos” denotadores de su defecto de organización y su falta de control, entonces también cabe entender cometido el delito en el domicilio social... la sucursal o la filial o el establecimiento donde desarrolle sus funciones el directivo o el empleado no controlado que cometió el delito»* (p. 58).

²⁶ Cfr., RODRÍGUEZ RAMOS (2025), pp. 326 y ss.

²⁷ Aquí se encuadran las posturas de quienes sostienen que el injusto específico de la persona jurídica (distinto del de la persona física) es el defecto de organización. Salvo error por mi parte, mantienen esta interpretación, con distintos matices: BACIGALUPO SAGGESE (2025), pp. 95 y ss.; BACIGALUPO SAGGESE (1998), *passim*; BARJA DE QUIROGA (2025), p. 30; CARRERA HORTAS (2025), pp. 235 y ss., *passim*; DE LA CUESTA ARZAMENDI (2013), pp. 21 y ss.; DE LA MATA BARRANCO (2020), p. 416; GÓMEZ-JARA DÍEZ (2023), pp. 39 y ss.; GÓMEZ-JARA DÍEZ (2016), pp. 126 y ss.; GÓMEZ-JARA DÍEZ (2005), 228 y ss.; LASCURAÍN SÁNCHEZ (2022), p. 201; PÉREZ MACHÍO (2020), pp. 473 y ss.; PÉREZ MACHÍO (2017), pp. 89 y *passim*; ZUGALDÍA ESPINAR (2017), pp. 23 y ss. Esta es la visión que parece asumir la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la famosa «bisiesta», la STS 154/2016, de 29 de febrero (ponente: José Manuel Maza Martín). No obstante, encontramos otras resoluciones que apuntan en otro sentido, como la reciente STS 298/2024, de 8 de abril (ponente: Antonio del Moral García). Cfr., sobre el posicionamiento de nuestro Tribunal de casación: ORTIZ DE URBINA JIMENO, MARTÍN MUÑOZ, TURIENZO FERNÁNDEZ (2024), pp. 13 y ss.; BOLDOVA PASAMAR (2019), pp. 347 y ss.; GIL NOBAJAS (2024), pp. 179 y ss.; ZAMARRA ÁLVAREZ (2025), pp. 407 y ss.

jurídica²⁸. Por ejemplo, tanto quienes defienden que el delito de la empresa consiste en una transferencia (limitada) del hecho cometido por la persona física, como quienes consideran que la empresa es co-responsable en la realización concreta del tipo penal, pueden coincidir en esa misma caracterización del hecho²⁹.

Estos distintos posicionamientos pueden influir en la respuesta a cuál es el *locus delicti commissi* en un supuesto como el que plantea la SAP de Barcelona 751/2022, de 12 de diciembre (ponente: José Manuel del Amo Sánchez), sobre el *caso Neymar 2*. En él se discute si el pago de una comisión económica por parte del Fútbol Club Barcelona a favor de una sociedad controlada por el jugador Neymar y su familia, para asegurarse su fichaje, constituye un delito de corrupción entre particulares del art. 286 bis CP³⁰. Los hechos se refieren a «(u)n contrato firmado el día 15 de noviembre de 2011 en la ciudad de Sao Paulo (Brasil)» y a un pago de diez millones de euros que

²⁸ Aunque, como señalan con acierto CIGÜELA SOLA y ORTIZ DE URBINA GIMENO (2023), pp. 79-80, prácticamente nadie defiende ahora modelos vicariales o de autorresponsabilidad puros, la mayoría de autores suelen encuadrarse en versiones más o menos cercanas a uno de los dos modelos.

²⁹ FEIJOO SÁNCHEZ (2016), pp. 83 y ss., *passim*. Recuerda este autor que lo decisivo es que exista una vinculación o conexión normativa que legitime la intervención penal (posición de garantía, accesoriadad, etc.), como se certifican en otros institutos dogmáticos que generan responsabilidad propia en relación con la acción de otros: «A las personas físicas y a las personas jurídicas se les imputa el mismo hecho (soborno, estafa, vertido contaminante, etc.), pero las razones por las que responden son distintas. Son como dos caminos que tienen un origen común pero se bifurcan. La responsabilidad de las personas jurídicas presenta características y criterios de imputación diferentes a los conocidos para las personas físicas. Siguiendo con el símil del camino, discurre por territorios distintos» (p. 90). Cfr., sobre los distintos modelos y posiciones el detallado trabajo de FEIJOO SÁNCHEZ (2024), *passim*. Salvo error de clasificación por mi parte, aquí podemos encontrar autores como CARBONELL MATEU (2020), pp. 523 y ss.; CARRATALÁ VALERA (2024), pp. 20 y ss.; DEL ROSAL BLASCO (2018), pp. 117 y ss.; DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO (2023), pp. 28 y ss.; DOPICO GÓMEZ-ALLER (2024), pp. 188 y ss.; DOPICO GÓMEZ-ALLER (2019), pp. 415 y ss.; FERNÁNDEZ TERUELO (2020), pp. 80 y ss., 98 y ss., *passim*; FERRÉ OLIVÉ (2019), p. 76; FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (2016); GALÁN MUÑOZ (2023), pp. 37 y ss.; GÓMEZ TOMILLO (2015), pp. 78 y ss.; GONZÁLEZ CUSSAC (2023), pp. 1-21; GONZÁLEZ CUSSAC (2020), pp. 306 y ss., *passim*; GONZÁLEZ RUS (2015), pp. 112-113; MENÉNDEZ CONCA (2025), p. 7; VELASCO NÚÑEZ, SAURA ALBERDI (2016), pp. 31 y ss.; VIOQUE GALIANA (2024), pp. 495 y ss. Enfatizando *especialmente* que el régimen de responsabilidad de la persona jurídica es un subsistema, no necesariamente penal, regido por las reglas del Derecho público, *vid.*, BOLDOVA PASAMAR (2022), pp. 27 y ss.; CIGÜELA SOLA (2015), pp. 293 y ss.; CIGÜELA SOLA (2016), pp. 1-29; GOENA VIVES (2018), pp. 115 y ss., *passim*; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (2023), pp. 41 y ss.; MOLINA FERNÁNDEZ (2016), pp. 361 y ss.; ROBLES PLANAS (2011), pp. 7 y ss.; SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ (2020), pp. 1-11; SILVA SÁNCHEZ (2020), pp. 2-3. Más radicalmente, ALFARO ÁGUILA-REAL (2024), pp. 470 y ss.

³⁰ Cfr., FEIJOO SÁNCHEZ (2023a), pp. 1-31; BERENGUER PASCUAL (2023), pp. 415-435; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO (2025), pp. 65 y ss.

«se ingresaron por el futbol Club Barcelona en la cuenta de N&N. Consultoría Esportiva e Empresarial Limitada en Sao Paulo el 9 de diciembre de 2011». Si se sostiene que el injusto del FCB se comete también en el lugar en el que se produjo la desorganización, el lugar de comisión del delito será *también* España. Si, por el contrario, se considera que esta desorganización no es un elemento (siquiera parcial) del delito, el lugar de comisión será únicamente Brasil³¹.

A nadie se le escapa que esto puede tener implicaciones a la hora de decidir si los Tribunales españoles son o no competentes. Sin ir más lejos, puede resultar decisivo en el *caso Neymar 2* porque en el momento de los hechos aún no estaba en vigor el apartado n) del art. 23.4 LOPJ, que prevé la aplicación extraterritorial de los delitos de corrupción en los negocios entre particulares³². Ahora bien: el alcance concreto de estas discrepancias doctrinales debe examinarse teniendo en cuenta que la ley es el punto de referencia insoslayable. Al análisis de lo que la ley dice —y lo que no—, sobre la atribución de jurisdicción, y la medida en que estos criterios son aplicables al régimen de personas jurídicas, dedicaré las siguientes páginas.

III. APLICABILIDAD DEL ACTUAL ART. 23 LOPJ A LOS DELITOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

III.1 Principio de territorialidad (apartado 1)

Brevemente: el art. 23.1 LOPJ asigna a los Tribunales españoles el conocimiento de las causas por delitos *cometidos en territorio español*³³. A falta de regulación expresa sobre cuándo se entiende cometido el delito en el territorio, la jurisprudencia ha adoptado decididamente la teoría de la ubicuidad³⁴, según la cual «el delito se consuma en todos los lugares en los que se ha llevado a cabo la acción o en el lugar en el que se haya producido el resultado», considerándose que, en los

³¹ Aunque, como advierte FEIJOO SÁNCHEZ, en la resolución de la Audiencia Provincial este problema se plantea en unos términos distintos porque parte de la premisa (discutible) de que algunos elementos del tipo del 286 bis CP se realizaron en España: FEIJOO SÁNCHEZ (2023a), pp. 16 y ss. Cfr., el comentario del propio ponente de la sentencia de la Audiencia Provincial, DEL AMO SÁNCHEZ (2023), pp. 6 y ss.

³² El apartado n) fue incorporado por la LO 1/2014, en vigor desde el 14 de marzo de 2014, con posterioridad a los hechos probados de la sentencia. Su aplicación al caso supondría una aplicación retroactiva de norma desfavorable en la medida en que esta supone una *ampliación* de la incriminación. En este sentido, también FEIJOO SÁNCHEZ (2023a), pp. 16-17.

³³ Sobre el concepto jurídico de territorio, *vid.*, MOLINA FERNÁNDEZ (2019), pp. 140-143; REBOLLO VARGAS (2009), p. 6.

³⁴ No era la única posibilidad, aunque la anterior LOPJ de 1870 también optaba por una versión de la teoría de la ubicuidad en el art. 335 («El conocimiento de los delitos comenzados á cometer en España, y consumados ó frustrados en países extranjeros, corresponderá á los Tribunales y Jueces españoles, en el caso de que los actos perpetrados en España constituyan por sí delito, y sólo respecto á estos»).

delitos de omisión, «el lugar de comisión se considerará, en principio, aquél en el que el omitente debía haber realizado la acción». También, en los supuestos «de tentativa o preparación, el lugar de comisión será tanto el lugar donde se realice la preparación o donde se dé comienzo a la ejecución, como el lugar en el que, según la representación del hecho del autor, debía producirse el resultado (no acaecido)»³⁵.

El principio de territorialidad así definido —sin especificar los sujetos responsables—, nos ofrece un marco para interpretar qué hechos imputables a la persona jurídica son enjuiciables por Tribunales españoles. Un marco no exento de problemas³⁶, pero delimitado. El delito se comete en todos los lugares en los que la persona jurídica actuó o debería haber actuado, o en los que el resultado típico ocurrió o debiera haber ocurrido³⁷.

Ahora bien, ¿dónde y en qué circunstancias puede considerarse que la persona jurídica «actuó o debería haber actuado»? Este criterio exige una reflexión más profunda, especialmente en dos casos. El primero se

³⁵ STS 1/2008, de 23 de enero (ponente: Enrique Bacigalupo Zapater). La doctrina jurisprudencial sobre la teoría de la ubicuidad es muy consistente desde que fuera adoptada en el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005, como puede observarse en las SSTS 507/2020, de 14 de octubre (ponente: Juan Berdugo Gómez de la Torre); 307/2016, de 13 de abril (ponente: Alberto G. Jorge Barreiro); 456/2013, de 9 de junio (ponente: Juan Berdugo Gómez de la Torre).

³⁶ Algunos los esboza agudamente REBOLLO VARGAS (2009), pp. 1-23, en relación con el criterio de atribución de competencia si es España el lugar donde el agresor se *representa* el resultado delictivo. Esta es la *ratio decidendi* del supuesto de la mencionada STS 1/2008, de 23 de enero (ponente: Enrique Bacigalupo Zapater): «el delito debe ser considerado cometido dentro del territorio español, pues en éste debía producirse, según la representación de los autores, el ingreso clandestino de las personas transportadas». Para REBOLLO VARGAS, esta interpretación supone una vía indirecta de aplicación de lo que se conoce como Derecho penal de autor (p. 20). Pero hay otros problemas que también se ponen de manifiesto en otras jurisdicciones. MONGILLO y BIRRITTERI destacan que en muchos lugares donde se aplica el principio de ubicuidad el problema es que los elementos de los tipos penales se definen cada vez de manera más difusa e imprecisa, «hasta el punto de que parece tratarse de una forma de ‘territorialidad ficticia’ o, dicho de otro modo, de la territorialización de lo que es, en esencia, extraterritorial». Lo que ocurre es que se requiere muy poco para cumplir con el requisito de territorialidad: una transferencia bancaria desde el Estado para pagar un soborno en el extranjero, una llamada telefónica en la que un directivo instruye a un agente extranjero para cometer un delito en ese país extranjero, o una reunión de altos directivos en el Estado para planificar actividades delictivas fuera de la frontera. A los problemas de legitimidad, debe añadirse que estas estrategias de tipificación o interpretación de los tipos suponen, en la práctica, la elusión de los requisitos sustantivos y procesales que suelen ser necesarios para ejercer formas extraterritoriales de jurisdicción, así como serios problemas de *bis in idem*: MONGILLO, BIRRITTERI (*en prensa*). Sobre esto, *vid* también BLANCO CORDERO (2022), pp. 9 y ss.; BROWN (2023), pp. 61-81; MONGILLO (2023), pp. 139 y ss.; SCOLLO (2023), pp. 1-66; VERVAELE (2018), pp. 161-166.

³⁷ El criterio material que subyace es la valoración global de los hechos: al Estado le concierne toda intromisión ilegítima que se produzca en un ámbito relevante de su soberanía. *Vid.*, LASCURÁIN SÁNCHEZ, VALVERDE-CANO (2025), p. 330.

refiere a la persona jurídica extranjera cuyo representante o empleado comete un delito en España actuando en su nombre y beneficio. El segundo, al caso inverso: cuando los representantes o empleados de una persona jurídica española actúan completamente en el extranjero, también en su nombre y beneficio. Las demás combinaciones —es decir, cuando tanto la persona jurídica como su agente actúan íntegramente en España o íntegramente en el extranjero— no suscitan, en principio, dificultades particulares. Vamos a examinar los dos tipos de supuestos por separado.

a) La responsabilidad penal de la persona jurídica extranjera por los delitos que cometen sus representantes o subordinados en España

Esta cuestión ha sido excelentemente tratada por BLANCO CORDERO en un artículo reciente³⁸. Haciéndose eco de dudas semejantes expresadas por la doctrina italiana sobre esta cuestión³⁹, este autor se plantea si se puede exigir responsabilidad a la sociedad matriz o a la persona jurídica extranjera que actúa en España a través de sus representantes o empleados, pero que, por lo demás, no tiene núcleos organizativos en el territorio nacional.

Aquí caben dos posibilidades. Si se considera que el delito de la persona física y jurídica es el mismo (con independencia de los fundamentos de imputación), entonces la persona jurídica podrá ser también declarada responsable conforme al art. 31 bis CP, tenga o no un núcleo organizativo relevante en España. Si, por el contrario, se parte de que el injusto específico del ente está conectado con el defecto de organización —materializado en el lugar donde la persona jurídica tiene su centro de decisión—, los Tribunales españoles serán competentes del delito cometido por la persona física con base en el principio de territorialidad, pero no la jurídica a cuyo nombre y beneficio se ha actuado porque su injusto no se ha materializado en el territorio español⁴⁰.

³⁸ BLANCO CORDERO (2023), pp. 1-32.

³⁹ La doctrina italiana parte de una constatación: el Decreto Legislativo No. 231/2001 no regula expresamente la situación, bastante frecuente, de que el delito sea cometido en Italia por parte de una entidad con sede en el extranjero. El artículo 4 del Decreto prevé la posibilidad de atribuir responsabilidad incluso por delitos cometidos fuera del territorio italiano, siempre que el ente tenga su sede en Italia, pero no indica cómo debe actuarse en caso contrario. Así, este artículo indica que: «1. En los casos y con las condiciones previstas en los artículos 7, 8, 9 y 10 del Código Penal, las entidades que tengan su sede principal en el territorio del Estado también son responsables en relación con los delitos cometidos en el extranjero, siempre que el Estado del lugar donde se cometió el delito no adopte medidas contra ellas».

⁴⁰ Así lo reconocen también BAFFA y CECCHINI cuando sostienen, en relación con la aplicabilidad del Decreto No. 231 al ente con sede principal en el extranjero por los hechos delictivos realizados en Italia, que esto depende por completo «del modo en que se entienda la relación jurídica que media entre el delito base cometido por la persona física en interés o

Este primer criterio ha sido sostenido por la jurisprudencia italiana desde el importante caso *Siemens AG* de 2004⁴¹. Más recientemente, la Sentencia del Tribunal Supremo italiano de 7 de abril de 2020 apuntala este criterio, apoyándose principalmente en dos argumentos. En primer lugar, recuerda que el art. 3 del Código Penal establece que la ley penal italiana vincula a todos aquellos que se encuentran en su territorio, con independencia de su nacionalidad; y que la responsabilidad de las empresas *deriva* del delito. La competencia judicial debe evaluarse, por tanto, atendiendo al delito subyacente. En segundo lugar, sostiene que el art. 1 del Decreto No. 231/2001 define su ámbito subjetivo de aplicación sin distinguir entre entidades italianas o extranjeras, por lo que inaplicar la norma cuando el sujeto no tenga personalidad jurídica italiana atentaría contra el principio de igualdad al suponer una diferencia de trato injustificada: «no hay razón para sostener que las personas jurídicas están sujetas a una disciplina especial respecto a la vigente para las personas físicas que eluda los principios de obligatoriedad y territorialidad del Derecho penal»⁴².

beneficio del ente y el ilícito de la persona jurídica», en BAFFA, CECCHINI (2018), p. 16. La cuestión puede sintetizarse de la siguiente manera: según las tesis minimalistas, el ilícito del que deriva la responsabilidad del ente y el delito base forman un todo inseparable, por lo que el lugar de comisión del delito de la persona jurídica lo determina, «por reflejo», el lugar del delito cometido por la persona física. Según las tesis maximalistas, en cambio, el ilícito del ente está dotado de una naturaleza compuesta, siendo la conducta individual un mero presupuesto para formular un reproche a la persona jurídica. De este modo, al fundarse su responsabilidad en elementos distintos a los de la conducta básica, la jurisdicción competente sería la del lugar donde se encuentra su centro de decisión, que es donde se materializa la «laguna organizativa» (pp. 16 y ss.). Cfr., también, SCOLLO (2023), pp. 1-66. BLANCO CORDERO añade a esta clasificación lo que considera tesis intermedias relacionadas con el interés económico y la actividad de la empresa. Solo si la persona jurídica está «presente» en el territorio, entendiendo como tal que el delito se ha cometido en su interés económico [DI VETTA (2021a), pp. 50 y ss.], o en el marco de una actividad relevante [DI MARTINO (2021), pp. 180-213], nos hallaremos ante un vínculo suficiente para establecer jurisdicción con base en el principio de territorialidad. *Vid.*, BLANCO CORDERO (2023), pp. 11-14.

⁴¹ En el caso *Siemens AGC*, considerado unánimemente como el *leading case* en esta materia, se aplicó a la persona jurídica —cuya sede principal se encontraba en el extranjero y que operaba en el territorio nacional a través de una unión temporal de empresas sin personalidad jurídica— la medida interdictiva de prohibición de contratar con la Administración Pública, salvo para obtener la prestación de un servicio público, por un período de un año. *Vid.*, la Sentencia del Tribunal de Milán de 27 de abril de 2004, confirmada en apelación el 28 de octubre de 2004.

⁴² Cassazione Penale, sezione VI, sentencia 7 abril 2020, No. 11626. En este supuesto, varias entidades recurrentes extranjeras fueron acusadas de actos de corrupción cometidos en Roma por personas que en ese momento ocupaban cargos de representación en las empresas. Como señala DI VETTA, en esta Sentencia el Tribunal no expone argumentos innovadores de fondo, sino que se adhiere a los ya expresados en otras resoluciones anteriores, especialmente las sentencias dictadas por el Tribunal de Apelación de Florencia, de 20 de junio de 2019, No. 3733, y por el Tribunal de Lucca, de 31 de julio de 2017, No. 222. *Vid.*, DI VETTA (2021a), p. 38; BAFFA, CECCHINI (2018), pp. 17 y ss.

Autores como DI VETTA han criticado decididamente esta interpretación. Algunas consideraciones son más bien *de lege lata*⁴³, y por tanto no tan interesantes para el contexto español, pero otras pueden resultarnos provechosas. Así, este autor sostiene que no cualquier criterio formal de conexión entre el Estado y la empresa extranjera es respetuoso con el Derecho internacional y el principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado. Para ejercer la jurisdicción *territorial* sobre una persona jurídica, el vínculo ha de tener un contenido material. En concreto, debe certificarse una «operatividad comercial o económica» en el territorio para que pueda ejercerse jurisdicción sobre una empresa que tiene su domicilio en otro país⁴⁴. Lo funda, entre otras razones, en exigencias de previsibilidad razonable de las normas penales: el criterio de conexión no solo debe estar expresamente previsto, sino que además debe poseer la suficiente solidez «como para colocar al individuo o a la entidad en condiciones de orientar su conducta ante la posibilidad de que otro Estado ejerza una pretensión jurisdiccional, aplicando su propio Derecho»⁴⁵.

En el régimen penal español es el delito de la persona física el que se tiene en cuenta para el castigo de la persona jurídica, con independencia de que quepa castigar a esta última sin que se dilucide la responsabilidad de la concreta persona física (art. 31 ter CP). Lo que otorga jurisdicción es la comisión de *delitos* (art. 23.1 LOPJ), que son los que contempla el Libro II del Código Penal. Entre ellos no está incluido tener un ecosistema empresarial desorganizado o no disponer de un organismo de supervisión autónomo eficaz. No hay un Libro III con delitos «propios» de la persona jurídica que atribuyan jurisdicción, digamos, independiente, que obligue a determinar qué

⁴³ Por ejemplo, este autor recuerda que el Decreto No. 231/2001 guarda silencio sobre las hipótesis de actuación de sociedades carentes de evidencia organizativa o funcional en el territorio del Estado. Sostiene que el art. 4 adopta un enfoque territorial, definiendo para la entidad un parámetro *autónomo* que puede vincularse a la tradición de la «presencia corporativa» (*corporate presence*). A los arts. 1, 34 y 36 del Decreto No. 231/2001, por tanto, se les estaría otorgando una significación que no tienen ni pueden tener, y se estarían confundiendo planos distintos. *Vid.*, DI VETTA (2021a), pp. 38 y ss.; también SCOLLO (2023), pp. 60 y ss.

⁴⁴ DI VETTA (2021a), pp. 42 y ss. En caso contrario, considera que debe regir una presunción de extraterritorialidad. Para este autor, las decisiones judiciales que afirman la aplicabilidad extraterritorial del Decreto 231/2001 confunden el «fatto di connessione» con la responsabilidad del ente, erosionando el núcleo del ilícito organizativo. La autonomía del ilícito del ente exige que la conexión territorial esté basada en elementos propios del ente, no en la conducta delictiva de la persona física. *Vid.*, DI VETTA (2021b), pp. 10 y ss.

⁴⁵ DI VETTA (2021a), p. 56; DI VETTA (2021b), pp. 22 y ss. De manera similar IRARRÁZAVAL ZALDÍVAR (2021), p. 236 y ss., advierte que, tradicionalmente, la legitimidad de las normas que extienden el poder punitivo estatal a hechos extraterritoriales se ha analizado casi exclusivamente desde la perspectiva del Derecho internacional público, sin considerar al Derecho penal y sus principios y condiciones de legitimidad.

órgano jurisdiccional es competente —si el del lugar del delito de la persona física o el del delito de la persona jurídica—⁴⁶.

De manera análoga a como sostienen los tribunales italianos, podríamos decir que una interpretación del concepto de *delito* del art. 23.1 LOPJ que distinga entre lo que tiene de vertiente de persona física (perseguable sea o no extranjera) y lo que tiene de vertiente institucional o corporativa (solo perseguible si la entidad es nacional), supone un atentado al principio de igualdad, un privilegio injustificado para la persona jurídica extranjera⁴⁷. Lo interesante del argumento de DI VETTA es que nos sugiere que, aunque efectivamente haya una diferencia de trato, esta podría llegar a estar justificada por razones de equidad, atendibles sea cual sea la concepción que se mantenga sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica⁴⁸.

La pregunta que debemos hacernos entonces es si la obligación penal impuesta a la persona jurídica extranjera es exigible. Y hay dos razones fundamentales que nos llevan provisionalmente a decir que sí. La primera es que, en la medida en que la imputación de la persona jurídica requiere no solo la realización del delito por los sujetos a los que se refiere el art. 31 bis CP, sino que se realice *a su nombre o por cuenta y, sobre todo, en su beneficio*, esta tiene, en principio, razones para adecuar su comportamiento al ordenamiento en el que

⁴⁶ Resalta esto también AYALA GONZÁLEZ (2019), pp. 8, 9. En opinión del autor, tomarse en serio la afirmación de la existencia de delitos propios de las personas jurídicas «requeriría, desde un punto de vista técnico-legislativo, la inclusión en el CP de una Parte *Especial* para las personas jurídicas en el que el defecto de organización constituiría el único delito de posible comisión por ellas» (p. 18). Una idea parecida la traza tempranamente ROBLES PLANAS (2006), p. 19. A este autor no le aparece conveniente que se tipifiquen *delitos* de la persona jurídica, pero sí considera que «los ‘estados peligrosos’ de las personas jurídicas deberían ser objeto de una regulación especial que tendría que materializarse al margen del Código penal, a través de un cuerpo normativo cuyos destinatarios serían las propias personas jurídicas, que se ocupara de definir aquellas situaciones desorganizadas de las personas jurídicas que se quieren evitar y asociarles la correspondiente sanción (también pecuniaria)».

⁴⁷ Así lo entiende también BLANCO CORDERO (2023), pp. 17 y ss.

⁴⁸ Como destaca SILVA SÁNCHEZ (2023), pp. 6, 21 y ss., cualquier sistema de atribución de responsabilidad debe atender, como mínimo, a criterios de equidad. También ROBLES PLANAS (2022), pp. 3 y ss. Este autor se refiere a tres tipos de razones admisibles para atribuir responsabilidad, basadas en la lógica del beneficio, del favorecimiento o de la colaboración. No me resisto a transcribir su pedagógica exposición de las tres lógicas, utilizando como ejemplo la hipotética asignación de la responsabilidad por la limpieza de una calle a sus vecinos: «En virtud de la lógica del beneficio se le puede explicar al vecino que si él se beneficia de la calle, entonces debe responsabilizarse de que esté limpia, aunque él no la ensucie. En virtud de la lógica del favorecimiento se le puede explicar al vecino que la propia configuración de la calle estimula que otros la ensucien y que, siendo tal configuración asunto suyo, se le ha de responsabilizar a él también. En virtud de la lógica de la colaboración la responsabilidad del vecino nace por no colaborar con la Administración en las tareas de limpieza, aunque él no haya ensuciado nada» (p. 3).

interactúa, adoptando las precauciones requeridas por el Estado en el que opera y se lucra. Y, en segundo lugar, no supone una carga desproporcionada si se permite que sus modelos de organización, gestión y supervisión autónomos sean valorados de conformidad con el Derecho del Estado de nacionalidad de la persona jurídica⁴⁹. Tal y como señala BLANCO CORDERO, el art. 31 bis CP no exige que la persona jurídica adopte unos mecanismos formales determinados. La imposición de un modelo nacional rígido que no tenga en cuenta la eficacia de los modelos de organización y gestión extranjeros supondría una carga excesiva y, en ese sentido, injusta⁵⁰. En la medida en que el juez nacional puede realizar un «juicio de equivalencia» sobre la existencia y eficacia de los mecanismos que permiten excluir la responsabilidad de la persona jurídica⁵¹, puede afirmarse que la adopción de tales precauciones es razonable y previsible —o, como mínimo, no irrazonable o imprevisible—.

Es preciso advertir, sin embargo, que la lógica del beneficio no es la única que parece importar en la asignación de responsabilidad penal⁵². La doctrina más cualificada se refiere también al mantenimiento de la legalidad o al papel de las empresas en la prevención de delitos⁵³. Esto

⁴⁹ Es preciso recordar que el art. 9.11 CC establece que «La ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad, y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción». Aunque, obviamente, la norma relevante para evaluar si se ha cometido un delito en el territorio es la norma penal, el marco jurídico del país en el que la empresa tiene su domicilio debe ser objeto de valoración específica para evaluar el defecto de organización. También, en este sentido, BLANCO CORDERO (2023), p. 21.

⁵⁰ BLANCO CORDERO (2021), pp. 20 y ss. Esto entronca con otras críticas relacionadas con la universalización del derecho penal nacional. *Vid.*, DI VETTA (2021a), pp. 64 y ss.; DI VETTA (2021b), pp. 21 y ss.

⁵¹ BLANCO CORDERO (2023), p. 23. Esto encaja bien en la idea de que los modelos de cumplimiento no deben valorarse constatando únicamente una serie de elementos formales, sino examinando la adecuación y eficacia material del modelo. En este sentido, *vid.*, DEL ROSAL BLASCO (2018), *passim*; FERNÁNDEZ TERUELO (2020), p. 190 y ss.; GONZÁLEZ CUSSAC (2025), pp. 509 y ss.; LEÓN ALAPONT (2020), pp. 1-34; LEÓN ALAPONT (2019), pp. 1 y ss.; MATALLÍN EVANGELIO (2024), pp. 92 y ss.; NIETO MARTÍN (2023), pp. 1-42; NIETO MARTÍN (2022), *passim*; ORTIZ DE URBINA JIMENO (2018), pp. 1-7. Algunos autores muestran, sin embargo, que no siempre se valora en la práctica la adecuación del programa de cumplimiento. En ocasiones, los tribunales se limitan a constatar la existencia de tal programa sin mayores verificaciones sobre su validez: GONZÁLEZ CUSSAC (2025), pp. 446-447, especialmente nota al pie 27.

⁵² De hecho, la mejor doctrina ha calificado este elemento de conexión como disfuncional o problemático. Paradigmáticamente, RAGUÉS I VALLÈS (2024), pp. 35 y ss.; HERNÁNDEZ BASUALTO (2021); MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (2023), p. 71. Por esta razón, no puedo dejar de sorprenderme cuando se me ha acusado de «introyectado identitarismo» (que aún no sé bien qué significa) por sugerir la supresión de la exigencia de beneficio directo o indirecto ¡en un blog!

⁵³ *Cfr.*, FEIJOO SÁNCHEZ (2024), *passim*; ROBLES PLANAS (2022), pp. 6-7.

puede generar tensiones en el enjuiciamiento de personas jurídicas extranjeras porque ¿en qué medida es admisible imponer estas incumbencias de prevención o de mantenimiento de la legalidad de un determinado orden jurídico a unos entes adscritos al régimen de otro Estado? Aunque seguramente no haya mucho inconveniente en los ámbitos sujetos a una fuerte armonización internacional, como la lucha contra el blanqueo de capitales, fuera de ellos, no sería extraño que se planteen problemas de legitimación.

Advertido lo anterior, me parece que hay razones suficientes para aplicar las normas penales nacionales a la empresa extranjera como regla general⁵⁴. Estas están relacionadas con la afectación de la libre competencia con las empresas nacionales que, a diferencia de las extranjeras, tendrían que asumir los costes derivados de la prevención de delitos⁵⁵, así como los posibles vacíos de impunidad (si no se puede enjuiciar a la empresa responsable en el país cuyo orden jurídico se lesiona, ¿de qué delito responderá la empresa en lugar en el que tiene la sede?). Si el delito tiene una dimensión personal e institucional—esta última otorgada, conforme al Código Penal, de acuerdo con criterios eminentemente formales—⁵⁶, parece que hay que concordar con BLANCO CORDERO en que, al igual que las empresas españolas han de cumplir con la ley nacional, también deben hacerlo las empresas extranjeras que se benefician de la actividad mercantil en España, aunque sea a través de establecimientos sin personalidad jurídica⁵⁷.

b) La responsabilidad penal de la persona jurídica extranjera por hechos cometidos íntegramente en el extranjero

El segundo problema que presenta la aplicación del principio de territorialidad a los «delitos corporativos» es el reverso del anterior. ¿Qué ocurre cuando el único vínculo con el delito, materializado en el extranjero, es que la persona jurídica en cuyo nombre y beneficio se

⁵⁴ Aunque, quizás, esta respuesta tenga que matizarse si se eliminan elementos de conexión o si se amplía el catálogo de delitos por los que puede responder la persona jurídica.

⁵⁵ BLANCO CORDERO (2023), p. 9. MONGILLO añade que, de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la libertad de establecimiento de las empresas permite establecer límites nacionales, siempre que no sean discriminatorios y proporcionados, cuando entren en juego elementos relacionados con la protección de intereses públicos fundamentales. Este autor entiende que impedir que una empresa eluda la normativa penal de los países en los que se beneficia es una buena razón de orden público. *Vid.*, MONGILLO (2012), pp. 304 y ss., 500 y ss.

⁵⁶ Cfr., DEL ROSAL BLASCO (2018), pp. 35 y ss.; LEÓN ALAPONT (2022), pp. 1-6. Aunque, como explica de manera brillante CARRERA HORTAS (2025), pp. 159 y ss.; seguramente deba matizarse (en un sentido restrictivo) en algunos casos, p. ej., como cuando haya una auténtica confusión del patrimonio de la persona física y jurídica. Cfr., también, FERNÁNDEZ TERUELO (2020), pp. 58 y ss.

⁵⁷ BLANCO CORDERO (2023), pp. 14 y ss. Cfr., también, DEL ROSAL BLASCO (2018), p. 55.

ha actuado tiene sede social en España?

Esta fue la cuestión que tratamos LASCURAÍN SÁNCHEZ y yo en el capítulo de la obra colectiva *Verdes y Justas: Responsabilidad penal y diligencia debida en las organizaciones internacionales*⁵⁸. En él sostuvimos que «si entendemos que el Código Penal sitúa el injusto de la persona jurídica en su déficit de organización, en su mala gestión de ciertos riesgos personales, podemos sostener que el delito se comete donde se produce y quizás donde se concreta tal defecto de organización»⁵⁹. Por razones relacionadas con el principio de legalidad, ya que la determinación del sitio donde se ha producido el defecto organizativo (muchas veces omisivo) puede resultar difícil, consideramos que este lugar debía ser el del domicilio de la sociedad. Al fin y al cabo, aquí es donde, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, «se hall[a] el centro de su efectiva administración y dirección» (art. 9.1 LSC). El domicilio de la sociedad es el lugar en que la persona jurídica se organiza (o desorganiza)⁶⁰.

Como advertíamos en aquel trabajo, esto planteaba problemas cuando el hecho individual y el domicilio social no coincidían espacialmente. «Si no se tiene jurisdicción para enjuiciar a los autores individuales, y salvando posibles cuestiones, no menores, de prueba, de litispendencia y de *bis in idem*, ¿puede, o debe, afirmarse respecto de la persona jurídica?». Respondimos que sí, fundamentalmente por entender que se trata de un hecho propio y, además, porque es deseable desde la perspectiva de la prevención de futuros riesgos: «la empresa, a pesar de ser una fuente de peligro en relación con las conductas de los suyos en su favor, no ha sido debidamente controlada por aquellos que debían hacerlo»⁶¹. Y consideramos que esto es relevante para el orden público español porque, aunque el delito se haya cometido en el extranjero, la empresa garante de sus riesgos opera básicamente en España⁶².

Esta postura es completamente coherente con el planteamiento que

⁵⁸ LASCURAÍN SÁNCHEZ, VALVERDE-CANO (2025), pp. 315-340.

⁵⁹ LASCURAÍN SÁNCHEZ, VALVERDE-CANO (2025), p. 331.

⁶⁰ En sentido similar, GIMENO BEVIÁ (2014), p. 44; GASCÓN INCHAUSTI (2012), pp. 52-53.

⁶¹ LASCURAÍN SÁNCHEZ, VALVERDE-CANO (2025), p. 332.

⁶² Además, en relación con el problema de prueba y si el ejercicio de la acción penal debía condicionarse a la finalización del proceso contra el individuo, sostuvimos que aquí debía importarse lo que se conoce como «lógica del blanqueo»: «Como sucede en esta materia, en la que el juez del blanqueo no está condicionado por la existencia de una condena firme del delito fuente y puede él mismo proceder a la constatación del origen delictivo de los bienes, así en materia de responsabilidad de personas jurídicas el juez debería poder constatar la existencia de una conducta individual antijurídica para cuyo enjuiciamiento de responsabilidad penal no es competente», LASCURAÍN SÁNCHEZ, VALVERDE-CANO (2025), p. 333.

el propio profesor LASCURAÍN SÁNCHEZ ha desarrollado de forma muy clara y sugerente en otros trabajos⁶³. A mí, sin embargo, no me parece ahora tan convincente como entonces. Creo que hay razones de peso para sostener justamente lo contrario: si el único elemento de conexión es el domicilio de la persona jurídica —porque el hecho que desencadena la responsabilidad penal se ha producido íntegramente en el extranjero—, los Tribunales españoles no pueden declararse competentes para enjuiciar con base en el principio de territorialidad.

La principal razón tiene que ver, nuevamente, con la literalidad del art. 23.1 LOPJ. Incluso aunque se fundamente la responsabilidad corporativa en una suerte de injusto estructural⁶⁴ o de desorganización⁶⁵, lo cierto es que el tenor del artículo deja poco margen de interpretación: la jurisdicción se atribuye por los *delitos* que se materializan en el territorio (¡los que contiene la Parte Especial!), y —siento ser repetitiva—, disponer de un «estado de cosas desorganizado» o sin supervisión autónoma, no constituye delito alguno.

A esto podría oponerse que las acciones de la persona jurídica tienen relevancia penal, aunque no sean delictivas *per se*. Estas van a examinarse para, en su caso, excluir o limitar la responsabilidad, por lo que deben formar parte del objeto procesal si se pretende condenar a la persona jurídica. Del mismo modo en que podría enjuiciarse la conducta de un partícipe omisivo que actúa en el extranjero, podemos enjuiciar a la persona jurídica cuya inacción genera un riesgo o contribuye a la materialización del delito fuera del territorio nacional⁶⁶.

Creo, no obstante, que esta interpretación rebasa los límites de lo admisible. No porque suponga una aplicación analógica de la norma, ya que no hay una laguna que tenga que cubrirse recurriendo a la analogía. Lo que ocurre es que se aplica una consecuencia jurídica distinta a la prevista para ese supuesto de hecho: cuando un delito se comete en nuestro territorio, los Tribunales españoles tienen jurisdicción. En caso de que el delito tenga lugar fuera de nuestras fronteras, la misma consecuencia jurídica requiere la satisfacción de requisitos adicionales (p. ej., la presentación de una querrela por parte del Ministerio Fiscal).

⁶³ *Vid.*, especialmente, LASCURAÍN SÁNCHEZ (2022), pp. 195-206.

⁶⁴ *Vid.*, entre otros, CIGÜELA SOLA (2016), pp. 1-26. FEIJOO SÁNCHEZ lo vincula directamente con un defecto estructural que conduce a una «falta de cultura de cumplimiento de la legalidad»: FEIJOO SÁNCHEZ (2023), pp. 60 y ss.; FEIJOO SÁNCHEZ (2016), pp. 70;

⁶⁵ Que termina concretándose en el hecho individual: cfr., RODRÍGUEZ RAMOS (2016), p.

3.

⁶⁶ Además, como indica NIETO MARTÍN, el objetivo político criminal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas de estimular la cooperación de estas en el esclarecimiento del delito individual perpetrado en su seno, se desvanece si se escinden ambas responsabilidades en distintas jurisdicciones: NIETO MARTÍN (2022), pp. 277 y ss., *passim*.

Aplicar a estos supuestos las consecuencias previstas para los casos de territorialidad es una manera de eludir las barreras adicionales que el legislador ha considerado conveniente imponer⁶⁷. Por la vía de la interpretación no se debe «territorializar» aquello que era, *prima facie*, extraterritorial⁶⁸.

Alguien podría responderme que no me estoy haciendo cargo de la interpretación del principio de ubicuidad del Tribunal Supremo. Recordemos que la STS 1/2008, de 23 de enero (ponente: Enrique Bacigalupo Zapater), sostenía expresamente que, en los delitos omisivos, «el lugar de comisión se considerará, en principio, aquél en el que el omitente debía haber realizado la acción». Esta resolución menciona además otras legislaciones europeas con normas muy parecidas. Tantas, que el Tribunal considera que puede considerarse una regla constitutiva de Derecho penal internacional de los Estados europeos⁶⁹. De acuerdo con esta regla, pues, podemos decir que el delito de la persona jurídica se cometió en nuestro territorio porque el deber de actuar lo omitió en España. Con esto no estaríamos «territorializando» el injusto de la persona jurídica, sino aplicando correctamente una regla aparentemente compartida del principio de territorialidad.

Sobre este argumento cabe hacer dos observaciones. En primer lugar, una obviedad: a diferencia de otros Estados europeos, España no ha regulado expresamente el alcance concreto del principio de

⁶⁷ MONGILLO, BIRRITTERI (*en prensa*); MONGILLO (2023a), pp. 85-114.

⁶⁸ Algo distinto es que se sostenga que un «fragmento» del delito se ha materializado en nuestro país, como hace, por ejemplo, la SAP 751/2022, de 12 de diciembre.

⁶⁹ Así, en la Sentencia se indica que esa «es la configuración que la teoría de la ubicuidad presenta en un importante número de legislaciones penales europeas que la han adoptado positivamente, por ejemplo: § 9.1. Código Penal alemán (“Un hecho es cometido en todo lugar en el que el autor ha actuado o, en caso de omisión, donde hubiera tenido que hacerlo o en el lugar en el que, según la representación del autor, debiera haberse producido el resultado perteneciente al tipo”); § 67 (2) Código Penal austriaco (en términos similares al alemán); Código Penal esloveno, art. 10.2 (“[...] el delito se considera cometido sea en el lugar en el que se realiza la conducta, sea en el lugar en el cual, según la intención del autor, habría debido o podido verificarse el resultado prohibido”); Código Penal finlandés, Cap. I, § 10(2): “La tentativa de un hecho punible se considera cometida allí donde en el supuesto de su consumación probablemente o según la representación del autor hubiera debido producirse el resultado”; Código Penal polaco, art. 6 § 2 (“Un hecho prohibido será cometido en el lugar en el que el autor ha realizado la acción o en el lugar en el que ha omitido realizar la acción a la que estaba obligado o en el que debiera haberse producido el resultado típico según la representación del autor”); Código Penal portugués, art. 7.2 (“En el supuesto de tentativa el hecho se considera igualmente ejecutado en el lugar en el que, de acuerdo con la representación del agente se debería haber producido el resultado”); Código Penal suizo, art. 7.2 (“La tentativa se tendrá por cometida allí donde el autor ha ejecutado la acción o donde según su intención se hubiera debido producir el resultado”). En el derecho italiano análogas consecuencias derivadas de la teoría de la ubicuidad, prevista en el art. 6 CP, han sido elaboradas jurisprudencialmente respecto de distintas hipótesis».

territorialidad. Cabría hacer una lectura contraria a la del Tribunal Supremo, pues, dado que se trata de una cierta expansión del principio de territorialidad —especialmente en relación con la tentativa, que se perpetran también donde el acto *debió haberse cometido*—, que los Estados europeos lo hayan regulado expresamente no implica una cristalización de una suerte de Derecho consuetudinario europeo. Justo al contrario, podría significar que tales *expansiones* necesitan respaldo legal. En España, donde persiste la incertidumbre legal sobre el alcance del principio de territorialidad, eso debería llevar quizás a sostener una interpretación algo más conservadora.

Pero este no es el lugar donde pronunciarse críticamente sobre la interpretación jurisprudencial del principio de ubicuidad, que requeriría un examen más pormenorizado⁷⁰. La segunda objeción, en cambio, sí me parece decisiva. Y es que la defensa de esa tesis requiere a su vez que aceptemos dos premisas. La primera, que la persona jurídica es responsable como partícipe omisivo del delito cometido en el extranjero⁷¹. Y, la segunda, que la existencia de un adecuado programa de cumplimiento constituye un elemento negativo del tipo⁷².

Sin embargo, esto último no se deduce de la ley. Las personas jurídicas son penalmente responsables de los delitos cometidos por sus representantes o personas empleadas (art. 31 bis.1 CP). El Código Penal no exige que el déficit organizativo empresarial se relacione de manera negativa con el delito *concreto*, aunque sí uno parecido al que finalmente se comete. Así, el art. 31 bis.2. CP declara la exención de responsabilidad cuando se hayan adoptado medidas idóneas para «prevenir delitos *de la misma naturaleza* o para reducir de forma significativa el riesgo de comisión» (apartado 1.^º). Si el delito lo cometen los empleados, el art. 31 bis.1 b) CP requiere un incumplimiento *genérico* de los deberes de control de la actividad y, además, declara a la sociedad exenta si esta había adoptado un modelo de organización y gestión que, nuevamente, «resulte adecuado para prevenir delitos *de la naturaleza del que fue cometido* o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión». Con esta regulación, deducir que la acción (u omisión) de la empresa constituye un elemento negativo del delito concreto que se ha cometido en el extranjero es,

⁷⁰ Cfr., PAYER (2023), pp. 210 y ss.

⁷¹ RODRIGUEZ RAMOS (2016), pp. 1-11.

⁷² Esta interpretación partiría de que los programas de cumplimiento son la manifestación de esa correcta organización y de esa cultura de cumplimiento. En palabras de GONZÁLEZ CUSSAC (2025), p. 422: «Por consiguiente, los programas integrarían el presupuesto del castigo (tipicidad), como un requisito negativo, y de esta forma penetran en su fundamento».

sencillamente, una interpretación *contra legem*.

A todo esto hay que añadir una última razón práctica. Si enjuiciamos a la persona jurídica con sede en España por el delito cometido fuera de nuestras fronteras, ¿por qué delito? ¿El que establezca el Código Penal extranjero? ¿Y qué pena o consecuencia jurídica? ¿Y si nuestro Código Penal no prevé la responsabilidad de la persona jurídica para ese delito en concreto? En ausencia de una cláusula similar al principio de doble incriminación previsto en el artículo 23.2.a) de la LOPJ —para cuando una persona física comete un delito en el extranjero—, aplicar de forma expansiva el artículo 23.1 LOPJ para «territorializar» el delito de la persona jurídica supone, en la práctica, sortear las garantías específicas que el ordenamiento establece para los supuestos de extraterritorialidad⁷³.

III.2 Principio de personalidad activa (apartado 2)

El artículo 23.2 LOPJ atribuye competencia a los Tribunales españoles por delitos «que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho». Además, regula una serie de requisitos que deben concurrir para enjuiciar el hecho: ha de ser punible en el lugar de ejecución; el agraviado o el Ministerio Fiscal (en algunos casos, la Fiscalía Europea) han de interponer querrela; y el delincuente no debe haber sido absuelto, indultado, o no debe haber cumplido condena en el extranjero.

En el principio de personalidad activa el ejercicio del *ius puniendi* estatal se legitima por la nacionalidad del autor, con independencia del lugar del hecho. Quiero incidir en este aspecto: lo que se aplica es el Derecho interno, no el delito del lugar en el que se cometió el hecho, donde solo tiene que constatarse que es punible, y no siempre⁷⁴. Lo que subyace a este principio es el vínculo entre el Estado de origen y el

⁷³ Es útil traer aquí a colación el art. 113-5 del Código Penal francés, que establece que los actos de complicidad efectuados en territorio francés pueden ser perseguidos en Francia independientemente de si el acto primario fue cometido en el extranjero. Para poder enjuiciarlos, establece una triple condición: el acto primario debe constituir un delito o una falta; debe ser punible según el derecho extranjero; y tiene que haber recaído una decisión judicial firme: LEILEUR (2018), p. 197.

⁷⁴ Nótese que el apartado a) del art. 23.2 LOPJ, al formular el principio de doble incriminación, permite obviar este requisito en los casos en los que disponga en un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte. Como acertadamente señala BUCHHALTER MONTERO (2024), p. 457 y ss., esto no impide que puedan tomarse en consideración otros ordenamientos. Así lo hace, por ejemplo, el AAN 977/2021, de 22 de diciembre (que tiene en cuenta el Derecho portugués) o el AAN 29/2020, de 27 de octubre (Derecho ruso). *Vid.*, para más ejemplos, las sentencias que refiere el autor mencionado en la nota al pie 10.

autor. Las razones y extensión de este vínculo son difusas y sin duda problemáticas: no han faltado visiones que lo han relacionado con un deber de lealtad con el país de origen⁷⁵, y, en la tradición histórica, parece que sus raíces se hunden en la importancia del aspecto personal de la relación entre el soberano/titular del *ius puniendi* y sus vasallos⁷⁶.

En la actualidad, este sistema de soberanía personal se suele justificar de otras maneras indudablemente más liberales: como una suerte de contrapartida por la protección diplomática o consular que los nacionales infractores pueden recibir en el extranjero⁷⁷; para asegurar el mantenimiento de buenas relaciones interestatales⁷⁸; como una especie de «obligación positiva» de los Estados de origen frente a víctimas en el extranjero⁷⁹; o por la necesidad práctica para evitar la impunidad en los sistemas jurídicos que prohíben la extradición de los propios nacionales⁸⁰. Para los partidarios de una visión del Derecho penal que relaciona su legitimidad con diversas concepciones de ciudadanía, la personalidad activa es, incluso, un principio de atribución de jurisdicción mucho menos incómodo de justificar que el principio real de protección y algunos supuestos de jurisdicción universal. A la pregunta de «*By what right do you try me?*» el Estado puede legítimamente responder: «por el vínculo político que nos une

⁷⁵ Como explica AMBOS (2007), p. 279. De hecho, el principio absoluto de personalidad activa se convirtió en regla general durante como el nacionalsocialismo alemán en el decreto del ámbito de validez del derecho penal alemán (*Geltungsbereichsverordnung*) de 6 de mayo de 1940.

⁷⁶ RYNGAERT (2015), p. 107. Incluso, indagando mucho más atrás, en las relaciones de grupo o tribu: KASSAN (1935), pp. 240.

⁷⁷ Esto se conoce como la «teoría de la lealtad». «Los Estados pueden ejercer protección diplomática sobre sus nacionales cuando se cometen actos internacionalmente ilícitos contra ellos; en consecuencia, cabe sostener que dichos nacionales tienen deberes recíprocos hacia sus Estados de origen, incluido el respeto a las leyes de estos últimos cuando actúan en el extranjero»: RYNGAERT (2015), p. 106

⁷⁸ GALLANT (2021), p. 354; WATSON (1993), pp. 19 y ss. Este autor también señala puede mejorar la reputación del Estado de origen.

⁷⁹ Esto ha sido propuesto recientemente por MÉGRET (2019), pp. 19 y ss., a lo que añade «una obligación penal mínima en virtud del derecho internacional de mantener el orden y la justicia, con miras a minimizar el crimen en general».

⁸⁰ AMBOS (2007), pp. 278 y ss. Este autor pone el ejemplo de Alemania, cuya Ley Fundamental establece que un alemán, por norma, no puede ser entregado a un país extranjero. Se exceptúa sólo la entrega a Estados de la Unión Europea o a la Corte Penal Internacional. «Por tanto, si un alemán incurre en un delito fuera del territorio de la Unión Europea, podría eludir la persecución penal, con sólo regresar a Alemania y apelar a la mencionada previsión de la Ley Fundamental» (p. 278). De acuerdo con el Derecho constitucional estadounidense, Estados Unidos tampoco extradita a sus nacionales en ausencia de un tratado de extradición: *Valentine c. United States ex rel. Neidecker*, 299 U.S. 5, 8-9 (1936). En España, el art. 23.4.p) LOPJ prevé la competencia de la jurisdicción española por delitos anteriores cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos *extranjeros que se encontraran en España*, si su extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas, y siempre que así lo imponga un Tratado vigente.

antes de cometer el delito». O «porque disfrutas de los beneficios del estado de libertades al que puedes volver en cualquier momento»⁸¹. Dado el carácter *relacional* que la responsabilidad penal tiene para estos autores, puede ser menos problemático justificar que me castigue el Estado con el tengo una conexión previa de índole política, que un Estado extraño al que he ido únicamente de turismo⁸².

Una idea de ciudadanía en sentido material late en muchas de estas concepciones. Pero este *desiderátum* tiene un reflejo más bien escaso en la LOPJ, que admite el enjuiciamiento de extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho, o que no se interroga sobre la verdadera naturaleza del vínculo político: ¿es una persona que tiene el pasaporte, pero nunca ha vivido en España? ¿vota en las elecciones? ¿adquirió la ciudadanía gracias a una (ya extinta) *Golden visa*? Son preguntas completamente irrelevantes. Aunque hay sugerentes propuestas de autores que plantean modular las exigencias estatales en atención al tipo de vínculo que le une con el individuo⁸³, esto no tiene un reflejo de *lege lata*, al menos de momento. El art. 23.2 LOPJ alude a la nacionalidad en un sentido puramente formal, como también son formales las restricciones que lo acompañan⁸⁴.

⁸¹ PAWLIK (2012), pp. 120-121. En concreto, lo justifica con base en el derecho a volver al territorio que se deriva de la ciudadanía formal: PAWLIK (2006), p. 359.

⁸² Es imposible mapear de manera seria el estado de esta discusión en una nota al pie de página. El tema «ciudadanía y Derecho penal» ha alcanzado tales cotas de sofisticación y densidad (en el mejor de los sentidos), que solo puedo animar a los lectores que acudan a los excelentes trabajos de aquellos que han dedicado enormes esfuerzos a desarrollar estos planteamientos, entre los que cabe señalar GÜNTHER (2005); MAÑALICH (2005), pp. 63 y ss.; PAWLIK (2012); SILVA SÁNCHEZ (2018); DUFF (2018); CIGÜELA SOLA (2019), pp. 389-413; COCA-VILA, IRARRÁZAVAL (2021), pp. 56-72; IRARRÁZAVAL ZALDÍVAR (2021), pp. 228 y ss.; CASTELLVÍ MONSERRAT (2023), pp. 538-563; PUENTE RODRÍGUEZ (2023), pp. 357-369; MARTÍN LORENZO (2009); así como los libros colectivos de DUFF, PAWLIK, COCA-VILA, OROZCO LÓPEZ, IRARRÁZAVAL ZALDÍVAR (2023); y CIGÜELA SOLA, MARTÍN LORENZO (2025).

⁸³ COCA-VILA, IRARRÁZAVAL (2021), pp. 56 y ss.

⁸⁴ Por ejemplo, se limita a delitos especialmente graves o, como en España, se supedita a la satisfacción del requisito de la doble incriminación: GEORGE (1983), p. 4; RYNGAERT (2015), pp. 104 y ss. Como señala BUCHHALTER MONTERO, no es tan difícil encontrar otras limitaciones. A modo de ejemplos, este autor apunta que el CP danés prevé que, si la acción delictiva se realiza en un territorio extranjero reconocido por el Derecho internacional, no podrá imponerse pena más grave que la prevista por la Ley del lugar de la infracción (§ 10.2). De forma similar, el CP uruguayo, ordena la aplicación de la Ley penal más benigna para el nacional que realice una conducta en el extranjero castigada tanto por la Ley nacional como por la extranjera, siempre que se cumplan otros requisitos (art. 10.5.^o). En el Derecho penal histórico español se recogía una regla parecida: el art. 9.3.^o del CP de 1884 preveía la aplicación de la legislación extranjera, si esta era más benigna que la española, a algunos delitos cometidos por españoles en el extranjero. También el CP de 1928 contuvo una regla similar.

Esta constatación puede ser un argumento a favor de la aplicabilidad del art. 23.2 LOPJ a las personas jurídicas españolas⁸⁵. Puesto que este parece aludir a un concepto formal de ciudadanía, no hay motivos para excluir a otros entes que también tienen nacionalidad española o que pueden adquirirla con posterioridad. Ni siquiera se refiere al que «cometa un delito», sino al que sea «criminalmente responsable» de este. Tampoco parece decisivo el argumento histórico (en 1985, fecha de aprobación de la LOPJ, la responsabilidad penal de las personas físicas era la única imaginable), ya que no es la intención de los legisladores lo que debe prevalecer en la interpretación de la norma, sino el tenor literal. Y este no distingue entre los españoles o extranjeros nacionalizados «criminalmente responsables» a los que se refiere la norma.

A este argumento debe añadirse otro: y es que las sanciones previstas para las personas jurídicas, distintas de la multa, como la disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades o su inhabilitación para obtener subvenciones, son medidas que difícilmente pueden imponerse (y menos hacerse cumplir) desde el extranjero. Que el Estado del domicilio (aquel que realmente puede «morder», porque es en el que la empresa tiene la mayor parte de sus intereses económicos), sea el más indicado para imponerle una sanción realmente preventiva, también es un argumento favorable a una interpretación expansiva del ámbito subjetivo del art. 23.2 LOPJ. Por último, debe tenerse en cuenta que esta vía no es desconocida en el Derecho comparado. Otros ordenamientos recurren a esta técnica para enjuiciar a las empresas nacionales por cierto tipo de delitos cometidos en el extranjero, justificándolo en una manera de contribuir a la «igualación de las condiciones» en la red económica global⁸⁶. Así, en el artículo 12 de la *Bribery Act* de 2010, los tribunales británicos son competentes si, en el momento de realizar los actos u omisiones relevantes, era «una persona jurídica constituida conforme a la legislación de cualquier parte del Reino Unido» (h) o una sociedad de tipo *Scottish partnership* (i).

Vid., BUCHHALTER MONTERO (2024), pp. 456 y ss.

⁸⁵ La nacionalidad de las personas jurídicas se adquiere, según el art. 28 del Código Civil, cuando las «corporaciones, fundaciones y asociaciones, reconocidas por la ley y domiciliadas en el España», se constituyan como personas jurídicas con arreglo a las disposiciones del Código (art. 35 CC). En la Ley de Sociedades de Capital, el art. 8 prevé que «[s]erán españolas y se regirán por la presente ley todas las sociedades de capital que tengan su domicilio en territorio español, cualquiera que sea el lugar en que se hubieran constituido». Este artículo debe leerse junto con el siguiente (art. 9.2 LSC), que obliga a las empresas cuyo «principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio español» a que tengan su domicilio en España.

⁸⁶ Cfr., MONGILLO, BIRRITTERI (*en prensa*); MONGILLO (2023), pp. 89 y ss.

No obstante, es preciso señalar que hay otras razones que reman a favor de una interpretación que abarque únicamente a las personas físicas. En primer lugar, porque parece que la prohibición de extraditar sigue siendo la más extendida razón que justifica el principio de nacionalidad activa⁸⁷. Como sostuvimos con anterioridad el profesor LASCURAÍN SÁNCHEZ y una servidora, este problema no existe con las personas jurídicas. Estas no son extraditables y también carece de sentido extraditar a quien las represente para juzgar a la persona jurídica⁸⁸. Pero, además, hay un argumento práctico: teniendo en cuenta que la sanción «estrella» de las personas jurídicas es la multa, proporcional o establecida conforme al sistema de días-multa, ¿no tiene sentido que esto lo reciba el Estado donde se ha producido el daño, que es donde además se ha lesionado el orden público? ¿No es una manera de permitir que las empresas decidan el foro de su enjuiciamiento (*forum shopping*), estableciéndose en el lugar donde las sanciones penales son menos incisivas? Quizás esto podría resolverse promoviendo la imposición de medidas de decomiso o sanciones restaurativas, como sugieren NIETO MARTÍN, DE PABLO SERRANO o CARDONA BARBER⁸⁹, pero no parece que estas tengan por ahora un grado de implantación tan relevante en el contexto internacional como para servir como contraargumento.

En resumen: no parece haber razones concluyentes para excluir a las personas jurídicas del ámbito subjetivo del art. 23.2 LOPJ. La ley no diferencia entre personas físicas y jurídicas y *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*. No obstante, tampoco resulta disparatada una interpretación restrictiva. Al fin y al cabo, los españoles o extranjeros nacionalizados a los que se refería originalmente la LOPJ eran solo las personas físicas, por lo que la extensión a un supuesto no regulado (personas jurídicas) podría considerarse interpretación analógica contra reo. Por otro lado, no es obvio qué opción de atribución de jurisdicción es más deseable desde una perspectiva político-criminal. En este escenario, una previsión normativa expresa parece absolutamente necesaria. Ya sea siguiendo el camino trazado por el art. 4 del Decreto Legislativo italiano 231/2001, que establece la responsabilidad de las empresas italianas responsables de delitos cometidos en el extranjero (siempre que el Estado del lugar donde se

⁸⁷ Así también, DUFF (2020), pp. 477-478.

⁸⁸ «Esto último sería además desproporcionado (no estamos hablando de su responsabilidad personal) e innecesario, ya que la instrucción puede realizarse recurriendo a otros medios de auxilio internacional, y el enjuiciamiento puede realizarse con la presencia de abogado y procurador simplemente»: LASCURAÍN SÁNCHEZ, VALVERDE-CANO (2025), pp. 334-335.

⁸⁹ NIETO MARTÍN, DE PABLO SERRANO (2023), pp. 188 y ss., 219 y ss.; CARDONA BARBER (2023), 214 y ss.

cometió el delito no adopte medidas contra ellas), u otro distinto.

III.3 Principio de protección (apartado 3)

El criterio real o de protección es una garantía de autodefensa del Estado frente a injerencias que puedan dañar su seguridad nacional u otros intereses centrales⁹⁰. Se trata de un principio conectado con la consolidación del Estado-nación: el primer ejemplo moderno codificado se encuentra en el Código de Procedimiento Penal francés de 1808, cuyos artículos 5 y 6 atribuían jurisdicción sobre quienes afectaran desde el extranjero a la seguridad del Estado o quienes falsificaran el sello estatal, la moneda nacional u otros documentos nacionales, seguramente para defenderse por los delitos cometidos por exiliados y extranjeros contra la Francia revolucionaria en países que eran indiferentes o incluso hostiles a sus intereses⁹¹.

Otros Estados europeos siguieron el ejemplo francés, de modo que esta forma de jurisdicción estaba bien establecida a fines del siglo XIX⁹², aunque, a partir del siglo XX, ha cedido terreno ante la expansión de la territorialidad por la vía del principio de ubicuidad, que abarca tentativas y otros actos preparatorios, así como la «doctrina de los efectos»⁹³. En la actualidad continúa siendo un principio esencial y seguramente necesario, aunque debe reconocerse que puede resultar problemático cuando el interés estatal se define recurriendo a cláusulas abiertas⁹⁴ o de forma excesivamente amplia, entre otras razones,

⁹⁰ *Vid.*, RYNGAERT (2015), pp. 115 y ss.

⁹¹ CAMERON (2021), § 3. *Cfr.*, también, KRIZEK (1988), pp. 338 y ss., que sugiere que el principio de protección es muy anterior al nacimiento de los Estados-nación modernos. Considera que una forma primitiva de este principio fue empleada en el siglo XIII en las relaciones de extranjería entre las ciudades-Estado italianas.

⁹² Seguramente, el hecho de que este periodo coincida con el desarrollo del Estado liberal influye en el hecho de que los Estados en ocasiones no distingan bien entre el principio de protección y el principio de personalidad pasiva, como ocurre en el artículo 6 del Código Penal italiano de 1895. Al fin y al cabo, la protección de sus ciudadanos fácilmente puede considerarse un interés esencial del Estado. El principio de personalidad pasiva se abandona rápidamente por el riesgo de generar conflictos entre los Estados, aunque se ha recuperado en los últimos años en relación con ciertos delitos, como los de terrorismo. *Vid.*, CAMERON (2021), §§ 11, 13.

⁹³ La doctrina de los efectos fue enunciada por el juez Holmes en *Strassheim c. Daily*, 221 US 280 (1911), «los actos realizados fuera de una jurisdicción, pero destinados a producir —y que efectivamente producen— efectos perjudiciales dentro de ella, justifican que un Estado castigue la causa del daño como si el autor hubiera estado presente en el lugar del efecto, siempre que el Estado logre aprehenderlo». Esta doctrina, además de otras relacionadas con el requerimiento de un «nexo suficiente», han sido fundamentales para que los tribunales estadounidenses se declaren competentes en supuestos relacionados con el derecho de la competencia y la lucha contra el tráfico de drogas o la inmigración ilegal: BASEDOW (2014), § 10; CAMERON (2021), §§ 8, 17; COLANGELO (2014), pp. 1314, 1327; KRIZEK (1988), pp. 344 y ss. Por ejemplo, en *United States c. Medjuck*, 156 F.3d 916 (9th Cir. 1998), se declara satisfecho el requisito de nexo porque las drogas estaban destinadas a Estados Unidos.

⁹⁴ P. ej., la normativa finlandesa se refiere a los actos que «de alguna manera, violan o ponen

porque en esos casos la legislación penal difícilmente puede ofrecer una orientación clara a los posibles infractores. Un individuo podría ser castigado por una conducta no prohibida y amparada por la libertad de expresión en el Estado en el que se encuentra, si se considera delito grave en otro país⁹⁵.

En España, el principio de protección se recoge en el art. 23.3 LOPJ, que atribuye jurisdicción a los tribunales españoles para conocer de «los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional», siempre que se trate de delitos incluidos en una lista cerrada, como los delitos de traición o contra la independencia del Estado⁹⁶. Esta atribución se basa en el interés protegido por la norma, con independencia de quién sea el sujeto activo. Por lo tanto, no parece haber una razón convincente para excluir de esta previsión a las personas jurídicas, cuya actuación delictiva puede afectar de igual modo a los intereses nacionales⁹⁷.

Además, el tenor literal del precepto no impone restricciones como las que sí encontramos en otras disposiciones, particularmente en el art. 23.1 LOPJ. En este contexto, la expresión cometer un «hecho», a diferencia de cometer un «delito», puede interpretarse de forma amplia,

en grave peligro los derechos o intereses nacionales, militares o económicos de Finlandia». *Vid.*, HELENIUS (2018), p. 166.

⁹⁵ CAMERON (2021), § 21; RYNGAERT (2015), pp. 114 y ss.

⁹⁶ En relación con su antecesor, el art. 336 de la Ley provisional sobre organización del Poder Judicial, de 1870, el art. 23.3 LOPJ recoge una lista algo más amplia de delitos, aunque sean esencialmente coincidentes. Así, a diferencia del derogado art. 336, incorpora los también derogados delitos de sedición (c); los atentados contra autoridades o funcionarios públicos españoles (g); los delitos contra la Administración Pública española (h) y los relativos al control de cambios (i). La versión del art. 336 se refiere también a la introducción de moneda falsificada —y no solo su falsificación y expedición, como el art. 23.3—, y al atentado contra la «seguridad exterior del Estado», frente a los delitos de «traición y contra la paz o la independencia del Estado» del apartado a) del art. 23.3 LOPJ.

⁹⁷ Así lo dijimos también en LASCURAÍN SÁNCHEZ, VALVERDE-CANO (2025), pp. 335-336, donde sugerimos la conveniencia de añadir al catálogo de delitos del art. 23.3 LOPJ aquellos que puedan afectar de manera significativa a la economía española o al mercado bursátil español, en la senda marcada por las normas estadounidenses *Foreign Corrupt Practices Act* o *Sarbanes-Oxley*. A través de estas normas, EEUU se atribuye jurisdicción penal sobre sociedades extranjeras que cotizan en sus mercados con base en los efectos que puede tener en su economía los delitos cometidos por dichas sociedades, incluidos los delitos de corrupción en el extranjero. Es preciso tener en cuenta, no obstante, que seguramente no existan inaceptables «vacíos de jurisdicción» desde la inclusión de los delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales en la letra n) del art. 23.4 LOPJ. Además, como hábilmente explica GIMENO BEVIÁ (2019), no está claro que la adopción de criterios semejantes no vaya a ser contraproducente: «la Bolsa de Madrid no es *Wall Street*: Una de las razones por las que muchas sociedades cotizadas aceptaron las exigencias establecidas en la SOX, proviene de la circunstancia de que los mercados de valores estadounidenses son los más importantes del mundo. Si impusiéramos condiciones similares, previsiblemente el capital extranjero abandonaría el parqué madrileño» (p. 124).

incluyendo los hechos atribuibles a la persona jurídica desvalorados por el legislador⁹⁸.

Con todo, conviene advertir una dificultad adicional: algunos delitos comprendidos en el ámbito del principio de protección exigen que el autor tenga nacionalidad española. Es el caso del delito de traición del art. 581 CP, que solo se aplica al *español* que induce o se concierta con una potencia extranjera para declarar la guerra a España⁹⁹. Cuando el hecho lo comete un extranjero residente, se aplica el artículo 586 CP, con una pena inferior¹⁰⁰. Como puede adivinarse, los problemas de autoría y participación en delitos especiales estarán servidos en estos casos.

III.4 Principio de jurisdicción universal (apartado 4)

El principio de jurisdicción universal nace con la lucha contra la piratería y el *ius ad bellum*. El auge del comercio naval vino acompañado de un creciente riesgo: los piratas, personas con gran capacidad para huir de las aguas territoriales y de cometer delitos en alta mar. Fueron tempranamente reconocidos como *hostis humani generis* (enemigos de la humanidad) por los tratadistas medievales del *ius gentium*, que consideraban a los piratas como sujetos legítimos de la guerra justa¹⁰¹.

⁹⁸ A esto podría añadirse el argumento de VIVES ANTÓN, de que no es lo mismo «ejecutar» una acción que «cometer» un hecho. Mientras que la ejecución remite a la realización material del tipo penal, la expresión «cometer» (como también «realizar») es mucho más amplia: puede abarcar no solo la autoría en sentido estricto, sino también otras formas de participación. *Vid.*, VIVES ANTÓN (1977), p. 160.

⁹⁹ De manera similar, especifican que el sujeto activo debe ser un español los arts. 582, 583, 584 o 594 CP.

¹⁰⁰ La doctrina normalmente justifica esta curiosa redacción por el vínculo especial que une al traidor (el *español*) con el traicionado, que también existen con el extranjero residente, aunque en menor medida. *Vid.*, MOLINA FERNÁNDEZ (2025), núm. 19260; SEGRELLES DE ARENAZA (1994), p. 174. Seguramente, esta distinción ya no tenga sentido en nuestro actual contexto, puesto que también la conducta de un extranjero puede poner en peligro la seguridad del Estado y de sus ciudadanos. Por esta razón, creo que hay que concordar con PUENTE RODRÍGUEZ (*en prensa*) en que sería conveniente una modificación para que el principio de legalidad no nos impida hacer frente a estas conductas.

¹⁰¹ Este vínculo aparece, por ejemplo, en los escritos de GENTILI (1552–1608), que defendía una teoría de la guerra justa que abarcaba los intereses comunes de la Humanidad (*communi ratione et pro aliis*). Sostenía que la piratería es claramente contraria al *ius gentium* y a la sociedad humana, por lo que pueden emprenderse guerras justas contra ellos: GENTILI (1589). Para MARTÍNEZ, esto suponía un argumento a favor de algo similar a la doctrina moderna de las violaciones del derecho internacional *erga omnes*, que pueden ser invocadas no solo por el perjudicado, sino por cualquier persona; concepto relacionado con la idea de jurisdicción universal sobre ciertos delitos. *Vid.*, MARTÍNEZ (2012), pp. 104-105. Esta autora realiza un interesante análisis sobre el castigo de los *hostis humani generis*, indicando también que, aunque en los siglos XVIII y XIX estaba ya muy extendida la idea de que cabía enjuiciar a los piratas aunque no hubiera un vínculo de territorialidad o de nacionalidad, en la práctica, los ejemplos del ejercicio de este tipo de jurisdicción eran extremadamente escasos. Por ejemplo, en *United*

Más adelante, esta etiqueta se extendió a los tratantes de esclavos, que fueron enjuiciados por tribunales nacionales¹⁰² y por Comisiones Mixtas creadas principalmente en tratados bilaterales¹⁰³.

En la actualidad, es relativamente poco controvertido afirmar la existencia en el Derecho internacional de un principio de jurisdicción basado exclusivamente en la naturaleza del delito, con independencia de la existencia los vínculos tradicionales que otorgan legitimidad del ejercicio del *ius puniendi* estatal. El nuevo vínculo legitimador sería la naturaleza de los crímenes, que interpelan a la humanidad en su conjunto¹⁰⁴. Dicho esto: el diablo está en los detalles. Ni los Estados prescinden del requerimiento de ciertos vínculos a la hora de ejercer jurisdicción universal, ni los delitos que se recogen en el catálogo son siempre, claramente, atentados contra la humanidad en su conjunto¹⁰⁵.

States c. Palmer [16 U.S. 610 (1818)], el Tribunal Supremo declaró que, aunque el Congreso tenía capacidad de «establecer leyes castigando piratas extranjeros, incluso aunque no hayan cometido un delito en los Estados Unidos», la Ley de 1790 no fue concebida para establecer una jurisdicción tan amplia (pp. 106-107). Más adelante, sin embargo, se promulgó una nueva y más amplia ley contra la piratería en marzo de 1819. Esta norma fue la que se aplicó en *United States c. Smith* [18 U.S. 153 (1820)], que mantuvo que el Congreso había actuado conforme a la Constitución al definir la piratería en términos de contrariedad con el *ius gentium*, y que dicho Derecho, en lo relativo a la piratería, era lo suficientemente claro como para fundamentar una sanción penal.

¹⁰² En su campaña para la supresión del comercio de esclavos a nivel global, Gran Bretaña recurrió a la vía del enjuiciamiento de los tratantes extranjeros conforme al *ius gentium*. Este fue alegado en los *British Admiralty Courts* para condenar los barcos que estuvieran implicados en el comercio de esclavos. Por ejemplo, en el caso *The Amedie* en 1810, un barco americano que transportaba esclavos desde la actual Nigeria hacia Cuba, fue condenado por estar implicado en este comercio ilegal; y también en *The Fortuna*, Lord Stowell condenó un barco portugués sobre la base, no de un tratado anglo-portugués, sino por ser «contrario a las leyes de las naciones, justicia y humanidad». No obstante, como explica ALLAIN, esta posibilidad fue contestada, y finalmente rechazada, a partir del caso de *Le Louis*, por considerarse contraria a los principios de Derecho internacional. *Vid.*, ALLAIN (2015), pp. 54-59.

¹⁰³ Aunque hoy día son generalmente obviados, estos tribunales sobre la trata de esclavos pueden considerarse los predecesores de los actuales tribunales internacionales de derechos humanos. Se llamaban «Comisiones Mixtas» por estar compuestos por jueces de diferentes países, funcionaban de manera permanente y continua, y aplicaban el Derecho internacional. *Vid.*, MARTÍNEZ (2012), pp. 130 y ss.

¹⁰⁴ Los *Principios Princeton sobre Jurisdicción Universal*, un documento destinado a establecer el contenido del Derecho internacional de una manera «progresiva», comienza sosteniendo que «es una jurisdicción penal basada únicamente en la naturaleza del delito, sin tener en cuenta dónde se cometió el delito, la nacionalidad del presunto o condenado autor, la nacionalidad de la víctima ni ninguna otra conexión con el Estado que ejerce dicha jurisdicción», en (2001), p. 28. Cfr., BAUCELLS LLADÓS, HAVA GARCÍA (2007), pp. 119 y ss.; OLLÉ SESÉ (2017), pp. 1 y ss.; ROBLES CARRILLO (2014), pp. 131 y ss.

¹⁰⁵ Esto, por supuesto, ha alimentado las sospechas de politización de los Estados en el recurso a este principio para atribuirse competencia. En la Declaración de China en la Asamblea General de Naciones Unidas (2010), se acusa a los Estados europeos de recurrir a este principio para criminalizar determinadas nacionalidades, socavando

La regulación española es una buena muestra de esto¹⁰⁶, y, hasta donde alcanzo, no es una excepción. El artículo 23.4 LOPJ recoge, sí, delitos universalmente reconocidos como execrables, como el delito de genocidio o de lesa humanidad, pero también el tráfico ilegal de drogas (que no está prohibido en todos los países, al menos, no en los mismos términos) y los delitos de corrupción entre particulares (que, siendo atentados a la competencia, dudosamente pueden considerarse crímenes contra la humanidad en su conjunto). En cualquier caso, no es mi objetivo criticar el maltrecho y torturado principio de jurisdicción universal, sino analizar cómo se operacionaliza el art. 23.4 LOPJ cuando interviene una persona jurídica.

Si estuviésemos únicamente ante un listado de delitos, como en la regulación original de 1985, no sería problemático. Es decir, si la jurisdicción se confiriese únicamente en atención al delito y no al sujeto, las consideraciones serían idénticas a las que se han efectuado en el art. 23.3 LOPJ. Pero sucesivas modificaciones han ido incorporando criterios de conexión en cada uno de los delitos del listado. Estos requisitos son variados y normalmente atienden a la nacionalidad española del autor o la víctima. Pero a veces se refieren específicamente a que el delito se cometa *por* o *por cuenta* de una persona jurídica (apartados n y e, respectivamente), o que el procedimiento se *dirija contra* una persona jurídica o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España (apartados k, m, o). El apartado n), sobre corrupción entre particulares, prevé como requisito de conexión que «el delito hubiera sido cometido por el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización que tenga su sede o domicilio social en España».

Aquí caben dos interpretaciones¹⁰⁷. La primera, más restrictiva (pero también más intuitiva), se hace cargo del argumento *a contrario sensu* que transpira de esta regulación: solo seremos competentes de enjuiciar los delitos de las personas jurídicas en el extranjero cuando

negativamente su capacidad para mantener relaciones internacionales. *Vid.*, traducido en: (https://www.un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppUnijuri_StatesComments/China_E.pdf), acceso el 26/06/2025). Con el objetivo de «salvar» este principio, ha habido intentos de limitarlo precisamente mediante la exigencia de elementos de conexión, como la presencia del acusado y la subsidiariedad: LAFONTAINE (2012), pp. 1277-1302; CASSESE (2003), p. 589.

¹⁰⁶ Fue muy criticado el proceso de «vaciamiento» del principio de jurisdicción universal en las sucesivas reformas de la LOPJ: LLOBET ANGLÍ (2006), pp. 2 y ss.; PÉREZ ALONSO (2012), pp. 131 y ss.

¹⁰⁷ También las apuntábamos en LASCURAÍN SÁNCHEZ, VALVERDE-CANO (2025), pp. 337 y ss.

la Ley contemple expresamente esta posibilidad¹⁰⁸. Por ejemplo, en los delitos de terrorismo, se prevén como hechos de conexión que «el procedimiento se dirija contra un español» y que «el delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica con domicilio en España». Si se interpreta que las personas con nacionalidad española incluyen las entidades, las menciones específicas de las personas jurídicas serían completamente superfluas.

Cabría otra interpretación más generosa. Puesto que las alusiones específicas a la persona jurídica parecen provenir directamente de las Directivas europeas u otras normas internacionales (con el clásico *copy-paste* al que tanto recurre nuestro legislador), podría sostenerse que el argumento *a contrario sensu* no es adecuado porque las diferencias no responden a una voluntad del legislador de dejar fuera a las personas jurídicas¹⁰⁹. Esta exégesis sería además congruente con la lectura propuesta del art. 23.3 LOPJ, donde hemos entendido que la referencia a los «españoles o extranjeros» debe incluir a las personas jurídicas.

En mi opinión, sin embargo, esta última interpretación resulta asistemática además de forzada (¿deberíamos ser competentes también cuando la persona jurídica sea *víctima* de un delito si se prevé como criterio de conexión la nacionalidad española de la víctima?). Aunque las menciones específicas a las personas jurídicas vengan de exigencias asumidas de «fuera», el legislador ha tenido la oportunidad de incluirlas también en otros apartados y no lo ha hecho. Lo importante no es lo que el legislador tenga en mente (que puede en algún caso servir de criterio de interpretación *ex art. 3 CC*), sino lo que finalmente refleja en el tenor literal¹¹⁰. De hecho, es preciso recalcar que hay variaciones en las maneras de referirse a las personas jurídicas: a veces menciona que el delito tiene que cometerse *por* ella (apartado n), o *por su cuenta* (apartado e), mientras que otras ocasiones requiere que un *procedimiento se dirija* contra la persona jurídica (apartados k, m, o). Estos matices también deben influir necesariamente en la manera de determinar los supuestos que confieren jurisdicción a los Tribunales españoles.

En definitiva, en virtud del art. 23.4 LOPJ, solo habría competencia española para enjuiciar a las personas jurídicas por razones de universalidad cuando estuviésemos ante delitos de terrorismo (e),

¹⁰⁸ Esta interpretación se deduce también del trabajo de FEIJOO SÁNCHEZ (2023a), pp. 17 y ss.

¹⁰⁹ Así lo reconoce la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.

¹¹⁰ *Vid.*, RAMÓN RIBAS (2014), pp. 132 y ss.

contra la libertad e indemnidad sexual de menores (k), de trata de seres humanos (m), de corrupción en los negocios (n), o de falsificación de productos médicos (o).

IV. LA NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA

Se ha puesto de manifiesto en muchos otros lugares que los posicionamientos sobre la naturaleza de la responsabilidad penal de la persona jurídica pueden tener extraordinarias repercusiones prácticas, como, por ejemplo, en la interpretación de instituciones como la prescripción o la tentativa, en los efectos del error, o, incluso en lo relativo a la carga de la prueba¹¹¹. No es diferente en relación con los criterios de atribución de jurisdicción. Tal estado de cosas puede dar lugar a interpretaciones diversas, más o menos abarcativas, lo que se compadece mal con el principio de seguridad jurídica y es especialmente grave si tenemos en cuenta que las reglas de jurisdicción no son meras reglas procesales. En la medida en que en muchos casos suponen la creación de obligaciones penales *ex novo*, deben estar cubiertas por las garantías jurídico-penales. Aunque las interpretaciones extensivas no están prohibidas porque se mueven en el sentido literal posible¹¹², la línea que las separa de una aplicación analógica de leyes penales en «casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas» es estrecha.

Así, un principio del tipo *in dubio pro jurisdictione*, que extienda la jurisdicción en aquellos casos donde existan dudas de si somos jurídicamente competentes con arreglo al art. 23 LOPJ, no está proscrito en nuestro ordenamiento. La regla *in dubio pro reo* se refiere a los hechos y no a las cuestiones jurídicas. Y, como se reconoce mayoritariamente, no existe una regla de interpretación que obligue a los jueces a seleccionar la más favorable al acusado de entre todas las opciones posibles. Esto no obsta a que sea deseable el establecimiento de una regla específica, pensada y diseñada atendiendo a las particularidades que presenta la persona jurídica.

Aquí cabrían varias posibilidades. Podría optarse por un modelo formal, como el que establece el artículo 4 del Decreto Legislativo italiano 231/2001 al regular el supuesto del delito extraterritorial realizado por una persona que tiene su «sede principal» en Italia. En el caso inverso —operaciones efectuadas por empresas extranjeras en territorio italiano— los Tribunales han concluido que es suficiente con que se pueda atribuir el delito cometido en Italia a la persona

¹¹¹ BARDAVÍO ANTÓN (2022), pp. 2 y ss. Aunque, como agudamente señala DOPICO GÓMEZ-ALLER (2019), pp. 415 y ss., quizás sean menos de los que se suelen señalar.

¹¹² Cfr., sin embargo, la discusión descrita en RAMÓN RIBAS (2014), pp. 134 y ss. (y referencias).

jurídica. Es decir, no han de constatarse relaciones comerciales u operativas relevantes en territorio italiano para afirmar que existe un vínculo de conexión que legitime el establecimiento de jurisdicción¹¹³. La Ley de Contravenciones alemana (OWiG), aplicable a las personas jurídicas (§ 30 OWiG), también parece adoptar un criterio formal en el § 5: solo pueden sancionarse infracciones administrativas que hayan sido cometidas en territorio alemán o a bordo de buques o aeronaves alemanes¹¹⁴. La mayor parte de la doctrina determina el ámbito de aplicación del § 30 OWiG a partir del hecho de referencia (*Bezugstat*), por lo que este precepto se aplica a todas las empresas —nacionales y extranjeras— si el hecho que da lugar a la imposición de la multa se comete por la persona física en territorio alemán¹¹⁵.

Existen, no obstante, otras posibilidades que atienden a criterios materiales y más acordes —según los autores que las defienden— con el Derecho internacional consuetudinario. Hasta donde alcanzo, DI VETTA ha sido uno de los autores que más pormenorizadamente ha desarrollado estos criterios¹¹⁶. El autor parte de una premisa

¹¹³ Con una parquedad que ha suscitado una gran discusión. *Vid., inter alia*, DI VETTA (2021b), pp. 3 y ss.; DI VETTA (2023), *passim*; MANACORDA (2012), pp. 91 y ss.; MONGILLO (2021), pp. 188 y ss.; SCOLLO (2023), pp. 1-66.

¹¹⁴ Esto debe complementarse con el § 7 OWiG, que cristaliza el principio de ubicuidad de manera idéntica al § 9 StGB: «(1) El hecho se comete en el lugar donde el autor ha actuado o, en caso de omisión, debería haber actuado, o donde se ha producido o, según la concepción del autor, debería haberse producido el resultado que constituye el hecho. (2) El hecho del participe se comete también en el lugar en el que se cometieron o, a juicio del participante, debieron cometerse los elementos de la ley que permiten la pena con multa».

¹¹⁵ Cfr., AMBOS (2022), pp. 20 y ss.; SCHNEIDER (2013), pp. 491 y ss., que además muestra que esta interpretación tiene respaldo en la jurisprudencia (p. 492). Hay otros autores que mantienen, sin embargo, que el § 5 OWiG no se refiere a la responsabilidad de las personas jurídicas por *delitos*. En esos supuestos, la responsabilidad penal, tanto de personas físicas como jurídicas, estaría sujeta a las normas de jurisdicción penal (§§ 3 a 7 del StGB): ROGALL (2018), OWiG § 30. Es preciso tener en cuenta que, si la responsabilidad de la persona jurídica se basa en una infracción del deber de supervisión (*Aufsichtspflichtverletzung*), la empresa puede ser sancionada de acuerdo con el § 130 OWiG. Cfr., BÖSE (2018), pp. 219 y ss.; BÖSE (2021), pp. 395 y ss. En opinión de este autor, el régimen legal alemán (en concreto, los criterios de determinación de la jurisdicción en los delitos omisivos) permite que se apliquen las normas alemanas a las empresas cuya sede se encuentre en Alemania, cuando se cometan delitos en el extranjero y exista un deber de supervisión. En otras palabras: si se cumplen las condiciones mencionadas (influencia dominante, infracción del deber de supervisión), la empresa matriz puede ser responsable por los delitos cometidos por sus filiales extranjeras en el extranjero, conforme a los §§ 30 y 130 OWiG. Los principales obstáculos se encontrarían en la constatación de estos deberes de supervisión en relación con filiales con personalidad jurídica independiente, así como en la dificultad de atribuir responsabilidad penal a directivos por delitos violentos cometidos por empleados, ya que la mayoría de los delitos requieren una conducta dolosa por parte del autor. También, MOMSEN, WILLUMAT (2019), pp. 323 y ss.

¹¹⁶ Cfr., MONGILLO (2021), pp. 188 y ss.; DI MARTINO (2021), pp. 180 y ss.; SCHNEIDER (2013), pp. 488 y ss.

que considera fundamental, que es la importancia de la *presumption against territoriality*, que requiere verificar la razonabilidad de las aplicaciones extraterritoriales del derecho interno¹¹⁷. Además, es especialmente sensible a los problemas de previsibilidad que plantea la aplicación extraterritorial generalizada de leyes nacionales, así como otros problemas prácticos de aplicación de la ley penal: «[a]spectos fundamentales y cuestiones importantes que conciernen al ‘derecho aplicable’ (¿qué parámetros debe aplicar el juez para evaluar la conducta organizativa de sociedades no radicadas?) son tratados y resueltos desde un enfoque concreto o procesal, apelando al derecho de defensa mediante la prueba; y de este modo se asiste a una degradación de las exigencias de tutela, en la que la legalidad queda relegada forzosamente a un segundo plano, cuando en realidad habría debido ocupar el centro del escenario»¹¹⁸.

DI VETTA propone un enfoque alternativo, fundado en lo que considera el verdadero (y casi único) contenido del reproche normativo a la persona jurídica, que es su defectuosa organización. Desde esta perspectiva, considera razonable que el Estado donde la persona jurídica tiene su domicilio sea el competente para enjuiciarla como una implicación necesaria del motivo del reproche —no ajustarse a ciertos parámetros organizativos que reducen los riesgos delictivos en general—¹¹⁹. Además, sostiene que esta interpretación es compatible

¹¹⁷ Este principio, sostiene DI VETTA, se inscribe en la tradición del constitucionalismo estadounidense. En el caso *Morrison c. National Australia Bank* (2010), el Tribunal Supremo se enfrenta a un supuesto típicamente transnacional: unos inversores que demandan ante un Tribunal federal a una sociedad extranjera y a otra con sede en Florida, solicitando que se declare como *misconduct* una conducta fraudulenta relacionada con una transacción de valores que tuvo lugar en Australia. Se plantea la cuestión de si la legislación interna (*Securities Exchange Act*) tiene o no alcance territorial. El juez Scalia desarrolla un enfoque interpretativo distinto al seguido hasta entonces y propone centrar el análisis en el «objetivo de la Ley» para determinar el elemento decisivo a efectos de determinación del alcance espacial. En concreto, este elemento decisivo es la transacción (producida en Australia) y no la conducta engañosa (materializada en EEUU). Tras determinar este punto, sostiene que cuando en una norma «no hay una indicación clara sobre su aplicación extraterritorial, significa que no existe», ya que la probabilidad de incompatibilidad con otras normativas nacionales es tan obvia que seguramente desencadenaría un conflicto con otros ordenamientos extranjeros. Este enfoque fue retomado y perfeccionado en otras resoluciones, como en *Kiobel c. Royal Dutch Petroleum Co.* (2013), en este caso sobre la aplicación del *Alien Tort Statute*. Vid., DI VETTA (2021b), pp. 12 y ss.; DI VETTA (2023), pp. 90 y ss.

¹¹⁸ DI VETTA (2021b), p. 14.

¹¹⁹ Este lugar no debe identificarse con aquel en el que se produjo el déficit organizativo concreto que se materializó en el delito (*place of organizational failure*); sino con el sitio en el que se forman y adoptan las decisiones estratégicas de gestión y organización del ente, incluidas las directrices en materia de *compliance* (*place of risk management failure*). Para determinarlo, deberán tenerse en cuenta elementos formales y, solo cuando existan discrepancias relevantes, podrá recurrirse a otros criterios reales relacionados con la forma de organización empresarial. DI

con las exigencias materiales del principio de legalidad porque el establecimiento de la persona jurídica en el territorio le impone deberes de información sobre lo que está prohibido y, en consecuencia, puede ser sancionada legítimamente al poder presumirse su conocimiento¹²⁰.

Desde esta perspectiva, critica la generalización en la jurisprudencia italiana de lo que denomina «tesis monista» en la aplicación extraterritorial del Decreto Legislativo a entes que no tienen un núcleo organizativo en Italia. En su lugar, aboga por el recurso a una modalidad funcionalmente ampliada de territorialidad, de modo que se aplique el derecho nacional únicamente a entidades con las que se mantenga un vínculo económico o funcional, por ejemplo, porque desarrollan parte de su actividad en el territorio del Estado (*doing business criteria*); o porque generan, en un determinado mercado, un volumen de negocio u otro resultado de referencia que alcance determinados umbrales¹²¹. Por último, considera especialmente prometedor el enfoque del *Transnational Due Diligence Law* aplicable a contextos auténticamente transnacionales, donde se tienen en cuenta los diferentes cuerpos normativos en distintas jurisdicciones. Las reglas de la diligencia debida actuarían como una interfaz equipada para navegar el pluralismo jurídico de las cadenas de valor y afrontar los conflictos de jurisdicción que las caracterizan¹²².

En definitiva, lo que es evidente es que el ordenamiento español necesita incorporar unos criterios de atribución de jurisdicción específicamente concebidos para dar respuesta a las particularidades de los delitos de la persona jurídica. Idealmente, tras una reflexión detenida sobre la naturaleza de su responsabilidad, de modo que pueda darse respuesta a otras cuestiones que se presentan habitualmente ante los tribunales¹²³. En tanto dicha regulación no se materialice, los criterios del artículo 23 LOPJ deberían ser aplicados conforme a una interpretación de corte formal, sujeta, en todo caso, a los límites que imponen los principios constitucionales. Ahora bien, nada impide explorar vías alternativas de atribución de jurisdicción vinculadas al contenido propio del injusto —o del reproche normativo— de la

VETTA (2021b), pp. 17 y ss.

¹²⁰ DI VETTA (2021b), p. 15

¹²¹ DI VETTA (2023), pp. 504, 511 y ss., *passim*. Esta idea también transpira en VERVAELE (2018), pp. 186 y ss.

¹²² DI VETTA (2023), pp. 569 y ss.

¹²³ Cfr., FEIJOO SÁNCHEZ (2023a), p. 20; LÓPEZ JIMÉNEZ, OUBIÑA BARBOLLA (2014), pp. 19 y ss.; CALAZA LÓPEZ (2025), pp. 615 y ss. Esta autora recuerda que al estatuto procesal de la persona jurídica investigada no le resulta indiferente cuál sea la concepción sustantiva de su responsabilidad.

persona jurídica. Es, de hecho, una tarea aún pendiente.

V. CONCLUSIONES

La cuestión de la vigencia espacial de las normas penales se encuentra en la frontera del Derecho sustantivo y el procesal. Quizás por eso su análisis haya sido algo desatendido por los penalistas, a pesar de su evidente vinculación con cuestiones nucleares para el Derecho penal: se trata de decidir a quiénes se puede sujetar legítimamente al *ius puniendi* estatal.

Los límites de la *jurisdiction to adjudicate* y la *jurisdiction to prescribe* tienden a confluir, y esto tiene una lógica principialista y liberal, porque solo cuando la persona (física o jurídica) tiene la posibilidad de acceder al contenido de la norma es legítimo castigarla por no acomodar su comportamiento a ese mandato. A la hora de interpretar el art. 23 LOPJ, estas consideraciones deben estar, creo, especialmente presentes.

El objetivo de este trabajo ha sido determinar en qué medida son aplicables los clásicos principios de territorialidad, nacionalidad activa, protección y universalidad a los delitos de las personas jurídicas. Ante la ausencia de una regulación específica, nos teníamos que contentar con interpretar estos principios contenidos en el art. 23 LOPJ, diseñados a medida de la persona física. Era preciso advertir, sin embargo, que, como en tantas otras ocasiones, una preconcepción sobre lo que es o no la responsabilidad penal de la persona jurídica podía influir en la determinación del *locus delicti commissi*, y, por tanto, en la admisibilidad de la interpretación propuesta. Es decir, según cómo se conciba el injusto empresarial —si como injusto estructural, organizativo o como una mera traslación del ilícito individual—, el lugar de comisión, que afecta a la determinación de la competencia, variará sustancialmente. Por esta razón, y para mitigar los problemas de seguridad jurídica, me he ceñido lo más posible a la letra de la ley.

Reflexionar sobre los criterios de atribución específicos es necesario porque, aunque normalmente el foro de la persona jurídica sigue al de la persona física, los criterios de conexidad *presuponen* la jurisdicción, no la atribuyen. Aunque podamos ser competentes por un delito cometido por la persona física (por ejemplo, en virtud del principio de nacionalidad activa), esto no significa que podamos «arrastrar» a la persona jurídica si no tenemos un vínculo de jurisdicción que nos permita legítimamente enjuiciarla. También puede ocurrir que, por algún motivo, no se haya podido identificar a la persona concreta que desencadena la responsabilidad de la entidad (art. 31 ter CP). O que haya un vínculo con la persona jurídica (p. ej., tiene su domicilio en España), pero el delito se ha cometido en el extranjero.

El principio de territorialidad del art. 23.1 LOPJ plantea problemas

en dos tipos de casos: cuando una persona jurídica domiciliada en el extranjero comete un delito en España, y cuando el delito lo comete en el extranjero una persona jurídica española. En el primer escenario caben dos líneas de interpretación. Si se sostiene que el *locus delicti commissi* es el lugar donde la persona física realizó la acción u omisión que genera la responsabilidad penal de la persona jurídica, los tribunales españoles serán competentes para enjuiciar el delito corporativo. Otra línea exige un vínculo material con el foro, como cierta operatividad económica o comercial, porque considera que el reproche normativo se funda en el defecto de organización (que, en este caso, se produce en otro Estado). En ese supuesto, solo si se constata tal vínculo pueden enjuiciar los tribunales españoles. A mi juicio, la primera interpretación es la correcta porque el art. 23.1 LOPJ atribuye jurisdicción por el *delito cometido*. El delito que comete la persona jurídica (o que se le atribuye) no es de desorganización empresarial, que no está tipificado, sino uno de la Parte Especial. Además, dado que el art. 31 bis CP no exige una forma específica de organización ni impone modelos nacionales rígidos, puede concluirse que no existen razones constitucionalmente atendibles para excluir a la persona jurídica extranjera del enjuiciamiento. Lo contrario supondría un privilegio injustificado que lesiona el principio de igualdad, distorsiona la competencia e incrementa los vacíos de impunidad.

Distinto es el caso en que la persona jurídica, con sede en España, se beneficia de un delito cometido íntegramente en el extranjero por representantes o empleados actuando por su cuenta. Nuevamente, podría sostenerse que el defecto organizativo, que se produce en el domicilio social, podría justificar la competencia con base en el principio de territorialidad. Sin embargo, esta tesis tropieza con límites difícilmente superables. El más importante, nuevamente, es la literalidad del art. 23.1 LOPJ, que exige la comisión del delito en territorio español y no permite la «territorialización» artificial de un injusto omisivo sin incurrir en una extensión indebida. En ausencia de una cláusula de doble incriminación para personas jurídicas o de una regulación específica, ampliar la jurisdicción en estos casos supone erosionar garantías y proyectar el *ius puniendi* más allá de los límites que el legislador ha querido trazar.

En relación con el principio de personalidad activa, el art. 23.2 LOPJ permite ejercer jurisdicción penal sobre hechos cometidos en el extranjero por nacionales o nacionalizados, aludiendo a una noción formal de ciudadanía que no se interroga sobre la intensidad del vínculo político. Esta literalidad —que no distingue entre personas físicas y jurídicas ni exige que el responsable haya cometido el delito, sino que

sea penalmente responsable de él— podría justificar su aplicación a personas jurídicas españolas. La clave está en si asumimos que ese vínculo formal basta, o si, por el contrario, debemos restringir la jurisdicción a los supuestos en los que se niega la extradición.

El principio de protección, consagrado en el art. 23.3 LOPJ, responde a una lógica de autodefensa del Estado frente a amenazas externas a intereses vitales como la seguridad o la independencia nacional. Nada impide que sirva para atribuir jurisdicción por los delitos de las personas jurídicas porque también ellas pueden lesionar los bienes jurídicos tutelados. Esta misma lógica seguía también el art. 23.4 LOPJ, que en su redacción inicial bastaba con verificar el tipo penal. No obstante, la inclusión de requisitos de conexión adicionales obliga a revisar la respuesta porque muchos de ellos aluden expresamente a las personas jurídicas. El legislador ha previsto de forma expresa la competencia sobre entidades en algunos casos, pero no en otros, lo que sugiere —salvo una forzada interpretación extensiva— que la intención ha sido limitar la jurisdicción a los supuestos específicamente contemplados.

En fin, mientras el legislador no aborde de forma expresa las singularidades que plantea la atribución de jurisdicción en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, solo cabe operar con criterios de contención interpretativa. No se trata de nos tengamos que resignar a una lectura minimalista, pero sí de asumir que extender artificialmente la jurisdicción por vía hermenéutica —amparándonos en ficciones de ubicación o en reproches normativos implícitos— no solo tensiona el principio de legalidad, sino que erosiona la legitimidad del sistema penal en su conjunto.

VI. BIBLIOGRAFÍA

ALLAIN, J. (2015), *The Law and Slavery. Prohibiting Human Exploitation*. Leiden: Brill.

AMBOS, K. (2022), «El ámbito de validez extraterritorial del (nuevo) régimen jurídico alemán de sanciones contra las empresas», *Revista Penal*, 50, pp. 20-30.

- (2007), «Los fundamentos del ius puniendi nacional; en particular, su aplicación extraterritorial», *Boletín mexicano de derecho comparado*, 40(119), pp. 267-293.

AYALA GONZÁLEZ, A. (2019), «Responsabilidad penal de las personas jurídicas: interpretaciones cruzadas en las altas esferas», *InDret*, 1, pp. 1-23.

BACIGALUPO SAGGESE, S. (2025), «La responsabilidad penal de los entes colectivos: el modelo de imputación del Código Penal», en

BARJA DE QUIROGA, J. (coord.), *La imputación y la defensa de la persona jurídica*. Madrid: Aranzadi, pp. 79-114.

- (1998), *La responsabilidad penal de las personas jurídicas*. Barcelona: J. M. Bosch.

BARDAVÍO ANTÓN, C. (2022), «Imputación e injusto de la responsabilidad penal de la persona jurídica: lineamientos de un modelo de «autor detrás del autor», *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 24(16), pp. 1-48.

BARJA DE QUIROGA, J. (2025), «Introducción a las personas jurídicas y su responsabilidad en el sistema penal», en BARJA DE QUIROGA, J. (coord.), *La imputación y la defensa de la persona jurídica*. Madrid: Aranzadi, pp. 21-52.

BASEDOW, J. (2014), «Antitrust or Competition Law, International», en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Disponible online: {<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e897>}.

BAUCELLS LLADÓS, J., HAVA GARCÍA, E. (2007), «Posibilidades y límites del principio de justicia universal: el caso de Acteal», *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 2ª Época, 19, pp. 119-171.

BERENGUER PASCUAL, S. (2023), «De la comisión a la contratación. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 6.ª, de 12 de diciembre de 2022 (caso Neymar II)», *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 3ª Época, 30, pp. 415-435.

BLANCO CORDERO, I. (2023), «Responsabilidad penal de la persona jurídica extranjera por los delitos cometidos en España», *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 25(4), pp. 1-32.

- (2020). «Responsabilidad penal de las empresas multinacionales por delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y *ne bis in idem*», *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 22(16), pp. 1-47.

BLANCO LOZANO, C. (2001). «Principios espaciales y personales de aplicación del derecho penal español», *Cuadernos de Política Criminal*, 73, pp. 35-79.

BOLDOVA PASAMAR, M. A. (2022). «Naturaleza jurídica de los programas de cumplimiento», *Revista General de Derecho Penal*, 37, pp. 1-41.

- (2019), «Análisis de la aplicación jurisprudencial del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas», en CANCIO

MELIÁ, M., MARAVER GÓMEZ, M., FAKHOURI GÓMEZ, Y., GUÉREZ TRICARICO, P., RODRÍGUEZ HORCAJO, D., BASSO, G. J. (eds.), *Libro Homenaje al Profesor Dr. Agustín Jorge Barreiro. Volumen I*. Madrid: UAM Ediciones, pp. 347-360.

BÖSE, M. (2021), «Die strafrechtliche Verantwortlichkeit deutscher Unternehmen für Menschenrechtverletzungen im Ausland», en ENGELHART, M., KUDLICH, H., VOGEL, J., (eds.), *Digitalisierung, Globalisierung und Risikoprävention, Festschrift für Ulrich Sieber zum 70 Geburtstag*. Berlín: Duncker & Humblot, pp. 395-409.

- (2018), «German Report on prosecuting corporations for violations of International Law», en GLESS, S., BRONISZEWSKA-EMDIN, S. (eds.), *Prosecuting Corporations for Violations of International Criminal Law: Jurisdictional Issues (International Colloquium Section 4, Basel, 21-23 June 2018)*. Antwerpen: Maklu, pp. 211-233.

BROWN, D. (2023), «Extraterritorial Ambit through Offence Definitions, Technology and Economic Power», en Ó FLOINN, M., FARMER, L., HÖRNLE, J., ORMEROD, D. (eds.), *Transformations in Criminal Jurisdiction: Extraterritoriality and Enforcement*. Oxford: Hart Publishing, pp. 61-81.

BUCHHALTER MONTERO, B. (2024), «Aplicación del Derecho Penal extranjero por Tribunales nacionales: ¿Un aporte a la justicia y a la armonización Europea?», *ADPCP*, 77, pp. 453-479.

CALAZA LÓPEZ, S. (2025), «Responsabilidad penal de las personas jurídicas: ni privilegio sustantivo ni menosprecio procesal», en BARJA DE QUIROGA, J. (coord.), *La imputación y la defensa de la persona jurídica*. Madrid: Aranzadi, pp. 613-644.

CAMERON, I. (2021), «International Criminal Jurisdiction, Protective Principle», en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Disponible online: {<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1902#>}.

CARBONELL MATEU, J. C. (2020), «La persona jurídica como sujeto activo del delito», en DE VICENTE REMESAL, J., DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M., PAREDES CASTAÑÓN, J. M., OLAIZOLA NOGALES, I., TRAPERO BARREALES, M. A., ROSO CAÑADILLAS, R., LOMBANA VILLALBA, J. A. (dirs.), *Libro homenaje al Profesor Diego Manuel Luzón Peña con motivo de su 70º aniversario. Volumen I*. Barcelona: Editorial Reus, pp. 523-536.

CARDONA BARBER, A. (2023), «Comiso restaurativo», en NIETO MARTÍN, A., CALVO SOLER, R. (coords.), *Justicia restaurativa*

empresarial. Un modelo para armar. Barcelona: Reus, pp. 214-222.

CARRATALÁ VALERA, V. (2024), «Algunos apuntes sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el *compliance*: a propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 298/2024, de 8 de abril», *Revista General de Derecho Penal*, 42, pp. 1-28.

CARRERA HORTAS, A. (2025), *La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Especial referencia a las «personas jurídicas de pequeñas dimensiones»*. Madrid: Dykinson.

CASSESE, A. (2003), «Is the Bell Tolling for Universality? A Plea for a Sensitive Notion of Universal Jurisdiction», *Journal of International Criminal Justice*, 1, pp. 589-595.

CASTELLVÍ MONSERRAT, C. (2023), «Filosofía moral, exclusión social y legitimidad del castigo estatal», *Política Criminal*, 18(36), pp. 538-563.

CIGÜELA SOLA, J. (2019), «Injusticia social y derecho penal: sobre la ilegitimidad política del castigo», *DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 42, pp. 389-413.

- (2016), «El injusto estructural de la organización. Aproximación al fundamento de la sanción a la persona jurídica», *InDret*, 1, pp. 1-29.
- (2015), *La culpabilidad colectiva en el Derecho penal. Crítica y propuesta de una responsabilidad estructural de la empresa*. Madrid: Marcial Pons.

CIGÜELA SOLA, J., MARTÍN LORENZO, M. (dirs.) (2025), *Exclusión social, delito y responsabilidad penal. Estudios desde los fundamentos y la teoría del delito*. Barcelona: Atelier.

CIGÜELA SOLA, J., ORTIZ DE URBINA JIMENO, I., «La responsabilidad penal de las personas jurídicas: fundamentos y sistema de atribución», en SILVA SÁNCHEZ, J. (dir.), *Lecciones de derecho penal económico y de la empresa: Parte general y especial*. Barcelona: Atelier, pp. 75-97.

COCA VILA, I., IRARRÁZAVAL ZALDÍVAR, C. (2021), «A Criminal Law for Semicitizens», *Journal of Applied Philosophy*, 39(1), pp. 56-72.

COLANGELO, A. J. (2014), «What is extraterritorial jurisdiction», *Cornell Law Review*, 99(6), pp. 1303-1352.

DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L. (2013), «Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho penal español», *Revista Penal México*, 5, pp. 9-33.

DE LA MATA BARRANCO, N. (2020), «El cumplimiento normativo eficaz penalmente», en DEMETRIO CRESPO, E. (dir.), DE LA CUERDA MARTÍN, M., GARCÍA DE LA TORRE GARCÍA, F. (coords.), *Derecho Penal Económico y Teoría del Delito*. Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 411-430.

DEL AMO SÁNCHEZ, J. M. (2023), «El caso Neymar: un breve análisis de la sentencia de la AP Barcelona de 12 de diciembre de 2022», *Diario La Ley*, 10212.

DEL ROSAL BLASCO, B. (2018), *Manual de responsabilidad penal y defensa penal corporativas*. Madrid: Wolters Kluwer.

DI MARTINO, (2021), «Reati commessi all'estero e responsabilità degli enti», en PIVA D. (coord.), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001. Profili sostanziali e processuali*. Turín: Giappichelli, pp. 180-231.

DI VETTA, G. (2023), *La responsabilità da reato degli enti nella dimensione transnazionale*. Turín: Giappichelli.

- (2021a), «La responsabilità degli enti nella prospettiva dei 'grandi spazi'. Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001», *Archivio Penale*, pp. 1-71.
- (2021b), «Il giudice border guard nei «grandi spazi»: prospettive critiche intorno alla responsabilità degli enti», *Giurisprudenza Penale*, pp. 1-35.

DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J. (2025), «Los delitos de corrupción en los negocios entre particulares», *Revista Derecho Penal y Criminología*, 46(120), pp. 65-98.

DOPICO GÓMEZ-ALLER, J. (2024), «Tema 4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas», en DE LA MATA BARRANCO, N., DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., LASCURAÍN SÁNCHEZ, J. A., NIETO MARTÍN, A., *Derecho Penal Económico y de la Empresa*. Madrid: Dykinson, pp. 175-220.

- (2019), «Dos interpretaciones *contra legem* del régimen de exoneración de las personas jurídicas (art. 31 bis, apartados 2 y 4), en CANCIO MELIÁ, M., MARAVER GÓMEZ, M., FAKHOURI GÓMEZ, Y., GUÉREZ TRICARICO, P., RODRÍGUEZ HORCAJO, D., BASSO, G. J. (eds.), *Libro Homenaje al Profesor Dr. Agustín Jorge Barreiro. Volumen I*. Madrid: UAM Ediciones, pp. 415-430.

DUFF, A. (2020), «Defending the Realm of Criminal Law», *Criminal Law and Philosophy*, 14(3), pp. 465-500.

- (2018), *The Realm of Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- (2010), «Authority and responsibility in international criminal law», en BESSON, S., TASIOULAS, J. (eds.), *Philosophy of International Law*. Nueva York: Oxford University Press, pp. 589-604.

DUFF, A., PAWLIK, M., COCA-VILA, I., OROZCO LÓPEZ, H. D., IRARRÁZAVAL ZALDÍVAR, C. (2023), *Pena y vínculo político. Sobre el castigo no-paradigmático en el Derecho penal del ciudadano*. Barcelona: Atelier.

FEIJOO SÁNCHEZ, B. (2024), «Reflexiones Críticas sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Una Visión Española y Latinoamericana», *Revista Electrónica de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Compliance*, 5, pp. 1-131.

- (2023), «La función de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho penal español», *Revista de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance*, 1, pp. 1-122.
- (2023a), «La corrupción entre particulares del artículo 286 bis CP y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. (Comentario de algunos aspectos relevantes de la SAP de Barcelona —Sección 6ª— 751/2022, de 12 de diciembre, caso del fichaje de Neymar por el FC Barcelona)», *La Ley Penal*, 163, pp. 1-31.
- (2016), *El delito corporativo en el Código Penal español: cumplimiento normativo y fundamento de la responsabilidad de las empresas*. 2a ed. Cizur Menor: Thomson Reuter
- (2014), “Fortalezas, debilidades y perspectivas de la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles”, en ONTIVEROS ALONSO, M. (dir.), *La responsabilidad penal de las personas jurídicas*. Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 135-176.

FERNÁNDEZ TERUELO, J. G. (2020), *Parámetros interpretativos del modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y su prevención a través de un modelo de organización o gestión (compliance)*. Navarra: Aranzadi.

FERRÉ OLIVÉ, J. C. (2019), «Reflexiones en torno al compliance penal y a la ética en la empresa», *Revista Penal México*, 16-17, pp. 63-84.

FERZAN, K. K. (2020), «The reach of the realm», *Criminal Law and Philosophy*, 14(3), pp. 335-345

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (2016). *Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015*.

GALLANT, K. S. (2021), *International Criminal Jurisdiction*. Oxford: Oxford University Press.

- (2003), “Jurisdiction to Adjudicate and Jurisdiction to Prescribe in Jurisdiction to Adjudicate and Jurisdiction to Prescribe in International Criminal Courts”, *Villanova Law Review*, 48(3), pp. 763-842.

GASCÓN INCHAUSTI, F. (2012). *Proceso penal y persona jurídica*. Madrid: Marcial Pons.

GENTILI, A. (1589), *De iure belli. Comentatio tertia*. Londres.

GEORGE, B. J. (1983). «Jurisdictional Bases for Criminal Legislation and its Enforcement», *Michigan Journal of International Law*, 4(1), pp. 3-42.

GIL NOBAJAS, M. S. (2024), «Más de una década de responsabilidad penal de personas jurídicas: revisión jurisprudencial del artículo 31 bis del Código Penal Español a la luz de los principios legitimadores del derecho penal», *Revista Penal México*, 25, pp. 179-212.

GIMENO BEVIÁ, J. (2019). «La protección penal de los mercados de valores a través de la extraterritorialidad de la jurisdicción: Una aproximación desde el modelo estadounidense», *Revista Derecho & Sociedad*, 52, pp. 117-125.

- (2014). *El proceso penal de las personas jurídicas*. Navarra: Aranzadi.

GLESS, S., BRONISZEWSKA-EMDIN, S. (eds.) (2018), *Prosecuting Corporations for Violations of International Criminal Law: Jurisdictional Issues (International Colloquium Section 4, Basel, 21-23 June 2018)*. Antwerpen: Maklu.

GLESS, S., WOODS, S. (2018), «General Report on prosecuting corporations for violations of International Criminal Law: jurisdictional issues», en GLESS, S., BRONISZEWSKA-EMDIN, S. (eds.), *Prosecuting Corporations for Violations of International Criminal Law: Jurisdictional Issues (International Colloquium Section 4, Basel, 21-23 June 2018)*. Antwerpen: Maklu, pp. 13-40.

GOENA VIVES, B. (2017), *Responsabilidad penal y atenuantes en la persona jurídica*. Madrid: Marcial Pons.

GÓMEZ TOMILLO, M. (2015), *Introducción a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. 2ª edición*. Navarra: Aranzadi.

GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (2023), «El modelo constructivista de (auto)responsabilidad penal de las personas jurídicas: tres contribuciones de la teoría a la práctica», *Revista Electrónica de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Compliance*, 1, pp. 1-50.

- (2016), «Capítulo VI. El injusto típico de la persona jurídica (tipicidad), en BAJO FERNÁNDEZ, M., FEIJOO SÁNCHEZ, B. GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., *Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas*. Navarra: Aranzadi.
- (2005), *La culpabilidad penal de la empresa*. Madrid: Marcial Pons.

GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. (2025), «IX. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de cumplimiento», en GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. (dir.), VIDALES RODRÍGUEZ, C. (oord.), *Tratado de Derecho penal económico y de la empresa. Tomo I*. Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 433-626.

- (2023), «La huida de la responsabilidad penal de las personas jurídicas», *Revista Electrónica de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Compliance*, 4, pp. 1-21.
- (2020), *Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de cumplimiento*. Valencia: Tirant lo Blanch.

GONZÁLEZ RUS, J. J. (2015), «La pertinencia del reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España y valoración de la constitucionalidad y legalidad del modelo establecido», *Revista Penal México*, 8, pp. 99-113.

GÜNTHER, K. (2005), *Schuld und kommunikative Freiheit. Studien zur personalen Zurechnung strafbaren Unrechts im demokratischen Rechtsstaat*. Frankfurt: Vittorio Klostermann.

HELENIUS, F. (2018), «Finish report on prosecuting corporations for violations of International Criminal Law», en GLESS, S., BRONISZEWSKA-EMDIN, S. (eds.), *Prosecuting Corporations for Violations of International Criminal Law: Jurisdictional Issues (International Colloquium Section 4, Basel, 21-23 June 2018)*. Antwerpen: Maklu, pp. 149-178.

HERNÁNDEZ BASUALTO, H. (2021), «La insuficiencia de un modelo de “compliance” orientado exclusivamente a la responsabilidad penal de la persona jurídica», *La Ley Compliance Penal*, 5, pp. 1-22.

IRARRÁZAVAL ZALDÍVAR, C. (2021), «El vínculo de ciudadanía como límite a la aplicación extraterritorial del Derecho penal: una revisión crítica», *InDret*, 1, pp. 228-258.

KASSAN, S. (1935), «Extraterritorial Jurisdiction in the Ancient World», *The American Journal of International Law*, 29(2), pp. 237-247.

KRIZEK, M. B. (1988), «The Protective Principle of Extraterritorial Jurisdiction: A Brief History and an Application of the Principle to Espionage as an Illustration of Current United States Practice», *Boston University International Law Journal*, 6, pp. 337-359.

LAFONTAINE, F. (2012), «Universal Jurisdiction – the Realistic Utopia», *Journal of International Criminal Justice*, 10, pp. 1277-1302.

LASCURAÍN SÁNCHEZ, J. A. (2022), «Elogio de la responsabilidad penal de la persona jurídica», en GÓMEZ MARTÍN, V., BOLEA BARDON, C., GALLEGO SOLER, J. I., HOTAL IBARRA, J. C., JOSHI JUBERT, U. (dirs.), VALIENTE IBÁÑEZ, V., RAMÍREZ MARTÍN, G. (coords.), *Un modelo integral de Derecho penal. Libro Homenaje a la profesora Mirentxu Corcoy Bidasolo*. Madrid: Boletín Oficial del Estado, pp. 195-206.

- (2009). *Sólo penas legales, precisas y previas: el derecho a la legalidad penal en la jurisprudencia constitucional*. Navarra: Aranzadi.

LASCURAÍN SÁNCHEZ, J. A., VALVERDE-CANO, A. B. (2025), «Ámbito de jurisdicción: ¿cuándo son perseguibles en España los delitos de las personas jurídicas?», en DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., NIETO MARTÍN, A. (dirs.), VIOQUE GALIANA, L. M. (coord.), *Verdes y Justas: Responsabilidad penal y diligencia debida en las organizaciones multinacionales. Volumen I*. Madrid: Boletín Oficial del Estado, pp. 315-340.

LEILEUR, J. (2018), «French report on prosecuting corporations for violations of International Criminal Law», en GLESS, S., BRONISZEWSKA-EMDIN, S. (eds.), *Prosecuting Corporations for Violations of International Criminal Law: Jurisdictional Issues (International Colloquium Section 4, Basel, 21-23 June 2018)*. Antwerpen: Maklu, pp. 179-210.

LEÓN ALAPONT, J. (2022), «Personas jurídicas ‘imputables’ e ‘inimputables en el régimen de responsabilidad penal de los arts. 31 bis y ss. CP: una breve divagación a raíz de la errática jurisprudencia del Tribunal Supremo», *Diario La Ley*, 10191, pp. 1-6.

- (2020), «Retos jurídicos en el marco de las investigaciones internas corporativas: a propósito de los *compliances*», *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 22(4), pp. 1-34.
- (2019), «Criminal Compliance: análisis de los arts. 31 bis 2 a 5 CP y 31 quater CP», *Revista General de Derecho Penal*, 31, pp. 1-36.

LLOBET ANGLÍ, M. (2006), «El alcance del principio de jurisdicción universal según el Tribunal Constitucional Una discutible interpretación en la STS de 20 de junio de 2006», *InDret*, 4, pp. 2-21.

LÓPEZ JIMÉNEZ, R., OUBIÑA BARBOLLA, S. (2014), «La regulación de la persona jurídica imputada en el proceso penal: modelos a debate», *Revista de Derecho y Proceso Penal*, 34, pp. 19-58.

MANACORDA, S. (2012). «Limiti spaziali della responsabilità degli enti e criterio d'imputazione», *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1, pp. 91-112.

MAÑALICH, J. P. (2005), «Pena y Ciudadanía», *Revista de Estudios de la Justicia*, 6, pp. 63 y ss.

MARTÍN LORENZO, M. (2009), *La exculpación penal. Bases para una atribución legítima de responsabilidad penal*. Valencia: Tirant lo Blanch.

MARTÍNEZ, J. S. (2012), *The Slave Trade and the Origins of International Human Rights Law*. Oxford: Oxford University Press.

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. (2023), «La estructura de la infracción penal de la persona jurídica: el presupuesto (el déficit organizativo peligroso) y el resultado/condición objetiva de punibilidad (el hecho de conexión posterior)», *Revista Electrónica de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance*, 3, pp. 1-103.

MATALLÍN EVANGELIO, A. (2024), «Estándares de eficacia de los programas de cumplimiento: análisis integrado de condiciones y requisitos (artículo 31 bis C.P.)», *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 3ª Época, 31, pp. 91-122.

MÉGRET, F. (2019), «"Do Not Do Abroad What You Would Not Do at Home?": An Exploration of the Rationales for Extraterritorial Criminal Jurisdiction over a State's Nationals», *Canadian Yearbook of International Law*, 57, pp. 1-40.

MENÉNDEZ CONCA, L. G. (2025), «La carga de la prueba en los procesos penales contra personas jurídicas: revisión de la jurisprudencia tras la STS 298/2024, de 8 de abril», *Diario La Ley*, 10690, pp. 1-15.

MOLINA FERNÁNDEZ, F. (2025), «Traición», en MOLINA FERNÁNDEZ, F. (coord.), *Memento Práctico Penal 2025*. Madrid: Francis Lefebvre, núm. 19255-19312.

- (2019). «Vigencia espacial de la ley penal», en LASCURAÍN SÁNCHEZ, J. A. (coord.), *Manual de Introducción al Derecho Penal*. Madrid: BOE, pp. 139-160.
- (2016), «Societas peccare non potest... nec delinquere», en BACIGALUPO SEGGESE, S., FEIJOO SÁNCHEZ, B., ECHANO BASALDUA, J. I. (coords.), *Estudios de Derecho penal: homenaje*

al profesor Miguel Bajo. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, pp. 361-416.

MOMSEN, C., WILLUMAT, M. (2019), «Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen – Zurechnung von Verantwortung entlang von Wertschöpfungsketten», *KripoZ*, 6, pp. 323-337.

MONGILLO, V. (2023), «Criminalità di impresa transfrontaliera e giurisdizione penale ‘sconfinata’: il difficile equilibrio tra efficienza e garanzie», *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1, pp. 110-158.

- (2023a), «The Jurisdictional Reach of Corporate Criminal Offences in a Globalised Economy: Effectiveness and Guarantess ‘Taken Seriously’», en O’FLOINN, M., FARMER, L., HÖRNLE, J., ORMEROD, D. (eds.), *Transformations in Criminal Jurisdiction. Extraterritoriality and Enforcement*. Oxford: Hart, pp. 85-114.
- (2021), «Imprese multinazionali, criminalità transfrontaliera ed estensione della giurisdizione penale nazionale: efficienza e garanzie ‘prese sul serio’», *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 170(2), pp. 179-213.

MONGILLO, V., BIRRITTERI, E. (*en prensa*), “Human rights abuses, corporations and ‘borderless’ criminal jurisdiction”, en PÉREZ ALONSO, E., POMARES CINTAS, E., RAMOS TAPIA, I., VALVERDE-CANO, A. B. (dirs.), *Modern Slavery and Criminal Law*. Dordrecht: Springer.

NIETO MARTÍN, A. (2023), «La eficacia de los programas de cumplimiento: propuesta de herramientas para su valoración», *Revista de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Compliance*, 1, pp. 1-42.

- (2022), *El cumplimiento normativo como estrategia político criminal*. Buenos Aires: Hammurabi

NIETO MARTÍN, A., DE PABLO SERRANO, A. (2023), «Sanciones restaurativas para personas jurídicas», en NIETO MARTÍN, A., CALVO SOLER, R. (coords.), *Justicia restaurativa empresarial. Un modelo para armar*. Barcelona: Reus, pp. 188-199.

OLLÉ SESÉ, M. (2017), «Hacia un concepto común del principio de jurisdicción universal y del (nuevo) principio de jurisdicción penal interestatal», *La Ley Penal*, 127, pp. 1-21.

ORTIZ DE URBINA JIMENO, I. (2018), «Cultura de cumplimiento y exención de responsabilidad de las personas jurídicas», *Revista Internacional Transparencia e Integridad*, 6, pp. 1-7.

ORTIZ DE URBINA JIMENO, I., MARTÍN MUÑOZ, J., TURIENZO FERNÁNDEZ, A. (2024), «La responsabilidad penal de las personas jurídicas ante el Tribunal Supremo: un análisis sistemático», *Revista Electrónica de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance*, 5, pp. 1-58.

PAYER, A. (2023), «The Territorial Principle as a Basis for State Criminal Jurisdiction: Particularly with Regard to Cross-Border Offences and Attempts, and to Multiple Parties to an Offence Acting in Different Countries», *International Criminal Law Review*, 23, pp. 175-238.

PEDRAZ PEÑALVA, E. (2013), «Jurisdicción y competencia en los procesos penales contra las personas jurídicas», *La Ley Penal*, 101, pp. 1-27.

PÉREZ ALONSO, E. (2012), «Las últimas reformas del principio de justicia universal legalizadoras de la jurisprudencia “creativa” del Tribunal Supremo español», *Estudios Penales y Criminológicos*, 32, pp. 131-196.

PÉREZ MACHÍO, A. I. (2020), «Programas de cumplimiento normativo como paradigma de la justicia penal preventiva», en DEMETRIO CRESPO, E. (dir.), DE LA CUERDA MARTÍN, M., GARCÍA DE LA TORRE GARCÍA, F. (coords.), *Derecho Penal Económico y Teoría del Delito*. Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 471-502.

- (2017), *La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español. A propósito de los programas de cumplimiento normativo como instrumentos idóneos para un sistema de justicia penal preventiva*. Granada: Comares.

PÉREZ MANZANO, M. (2018), «*The Spanish connection*: los caminos del diálogo europeo en la configuración del alcance de la prohibición de incurrir en *bis in idem*», *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, 22, pp. 383-420.

PERKINS, R. M. (1971), «The Territorial Principle in Criminal Law», *Hastings Law Journal*, 22(5), pp. 1155-1172.

PUENTE RODRÍGUEZ, L. (*en prensa*), «La protección penal de los secretos de Estado».

- (2024), *El error de prohibición en Derecho penal económico*. Barcelona: Atelier.
- (2023), «Contra la atemperación (o supresión) del castigo penal del excluido», *InDret*, 2, pp. 357-396.

QUINTERO OLIVARES, G. (2004), *Adonde va el Derecho Penal. Reflexiones sobre las Leyes Penales y los penalistas españoles*. Madrid: Civitas.

RAGUÉS I VALLÈS, R. (2024), «La Actuación en Beneficio de la Persona Jurídica: Razones para la Eliminación de un Requisito Disfuncional en la Atribución de Responsabilidades Penales», *Revista Electrónica de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Compliance*, 4, pp. 1-44.

RAMÓN RIBAS, E. (2014), «Interpretación extensiva y analogía en el Derecho Penal», *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 3ª Época, 12, pp. 111-164.

REBOLLO VARGAS, R. (2009), «El delito de tráfico ilegal de personas y la (in)competencia de la jurisdicción española en aguas internacionales», *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 11(9), pp. 1-23.

ROBLES CARRILLO, M. (2014), «El principio de jurisdicción universal: estado actual y perspectivas de evolución», *Revista Española de Derecho Internacional*, 66(2), pp. 81-111.

ROBLES PLANAS, R. (2022), «Volver a empezar: las personas jurídicas y el Derecho penal», *La Ley Compliance Penal*, 8, pp. 1-10.

- (2011), «Pena y persona jurídica: crítica del artículo 31 bis CP», *Diario La Ley*, 7705, pp. 1-21.
- (2009), «El “hecho propio” de las personas jurídicas y el Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Reforma del Código Penal de 2008», *InDret*, 2, pp. 1-12.
- (2006), «¿Delitos de personas jurídicas? A propósito de la Ley austriaca de responsabilidad de las agrupaciones por hechos delictivos», *InDret*, 2, pp. 1-25.

RODRÍGUEZ RAMOS, L. (2025), «Sobre la culpabilidad de las personas jurídicas (Al hilo de las SSTS 514/2015, 154 y 221/2016)», en BARGA DE QUIROJA, J. (coord.), *La imputación y la defensa de la persona jurídica*. Madrid: Aranzadi, pp. 325-342.

- (2016), «Sobre la culpabilidad de las personas jurídicas», *Diario La Ley*, 8766, pp. 1-11.

ROGALL, K. (2018), «§ 30», en *Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten*, 5ª edición. C.H. Beck.

RYNGAERT, C. (2015). *Jurisdiction in International Law*, 2ª ed. Oxford: Oxford University Press.

SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, P. (2020), «La acción de las personas jurídicas: límites de una ficción», *La Ley Compliance Penal*, 3, pp. 1-11.

SAURA ALBERDI, B., VELASCO NÚÑEZ, E. (2016), *Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance*. Navarra: Aranzadi.

SCOLLO, L. (2023), «La responsabilità da reato degli enti: criteri e limiti della giurisdizione punitiva», *Archivio Penale*, 2, pp. 1-66.

SEGRELLES DE ARENAZA, I. (1994), *Protección penal del secreto de Estado*. Madrid: Edersa.

SILVA SÁNCHEZ, J. (2025), *Derecho Penal. Parte General*. Madrid: Civitas.

- (2023), «Lo real y lo ficticio en la responsabilidad ‘penal’ de las personas jurídicas», *Revista de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Compliance*, 1, pp. 1-23.
- (2020), «Editorial. El debate sobre la prueba del modelo de compliance: Una breve contribución», *InDret*, 1, pp. 1-3.
- (2018), *Malum Passionis. Mitigar el dolor en Derecho penal*. Barcelona: Atelier.

SCHNEIDER, A. (2013), «Der transnationale Geltungsbereich des deutschen Verbandsstrafrechts –de lege lata und de lege ferenda», *Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik*, 12, pp. 488-499.

VERVAELE, J. A. E. (2018), «Investigaciones en los delitos económicos y financieros: cuestiones jurisdiccionales y protección del principio de ne bis in idem», en DEMETRIO CRESPO, E., NIETO MARTÍN, A. (dirs.), *Derecho Penal Económico y Derechos Humanos*. Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 157-189.

- (2014), «*Ne bis in idem*: ¿un principio transnacional de rango constitucional en la Unión Europea?», *InDret*, 1, pp. 1-33.

VIOQUE GALIANA, L. M. (2024), *Diligencia debida en derechos humanos y responsabilidad penal de las empresas multinacionales*. Tesis Doctoral Universidad Castilla La Mancha, Ciudad Real.

VIVES ANTÓN, T. S. (1977), *Libertad de prensa y responsabilidad criminal (la regulación de la autoría en los delitos cometidos por medio de la imprenta)*. Madrid: Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense.

WATSON, G. R. (1993), «The passive personality principle», *Texas International Law Journal*, 28(1), pp. 1-46.

- (1992), «Offenders Abroad: The Case for Nationality-Based Criminal Jurisdiction», *Yale Journal of International Law*, 41(1), pp. 41-84.

WOLF, C. G. (1749), *De vi legum et decretorum in territorio alieno*. Halle: Impensis Orphanotropei.

ZAMARRA ÁLVAREZ, C. M. (2025), «Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Jurisprudencia del Tribunal Supremo», en BARJA DE QUIROGA, J. (coord.), *La imputación y la defensa de la persona jurídica*. Madrid: Aranzadi, pp. 407-594.

ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. (2017), «Teorías jurídicas del delito de las personas jurídicas (aportaciones doctrinales y jurisprudenciales). Especial consideración de la teoría del hecho de conexión», *Cuadernos de Política Criminal*, 121, pp. 9-34.